

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID
Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59
Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 285		FECHA: 15 de Septiembre de 2018
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	PÁG.
AMÉRICA LATINA	REPASO A LAS POLÍTICAS DE EE.UU. EN LATINOAMÉRICA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA. ANOTACIONES SOBRE "NUESTRO PATIO TRASERO"	2
ARGENTINA	EL FRACASO DE MACRI Y SU LABORATORIO NEOLIBERAL EN ARGENTINA	15
BOLIVIA	LA ESTABILIDAD BOLIVIANA, RESISTENCIA FRENTE A LA TEMPESTAD GEOPOLÍTICA	19
COLOMBIA	SEGÚN LA FISCALÍA, SE REGISTRARON 32 MIL HOMICIDIOS EN TRES AÑOS	22
EL SALVADOR	LA PUGNA EE.UU.-CHINA LLEGA A EL SALVADOR	22
GUATEMALA	PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE SOLIDARIDAD.	25
HAITÍ	TE OCUPO, TE VIGILO, TE ENDEUDO, TE MATO	26
NICARAGUA	DEMUESTRAN QUE LA CIA ESTÁ DETRÁS DEL INTENTO DE GOLPE EN NICARAGUA USANDO A GRUPOS DE ULTRAIZQUIERDA	28
	ACTORES EN EL CONFLICTO NICARAGÜENSE	32
PUERTO RICO	PUERTO RICO ENTERO ES UN MUSEO EN LLAMAS	33
VENEZUELA	LOS "PECADOS" DE VENEZUELA. (En clave cristiana)	35
	VENEZUELA: PROTESTAS DE UN SIGNO DIFERENTE.	37

AMÉRICA LATINA

REPASO A LAS POLÍTICAS DE EE.UU. EN LATINOAMÉRICA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA. ANOTACIONES SOBRE "NUESTRO PATIO TRASERO"

Antes de que dimitiera en junio, Thomas Shannon era el número tres en el Departamento de Estado de EE.UU., y muy influyente en materia de relaciones internacionales con América Latina y el Caribe. A lo largo de sus casi 35 años de carrera profesional, se ganó la reputación de ser un diplomático sumamente eficaz y un habilidoso negociador. Durante el Gobierno de Bush, Shannon trabajó como subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental (el más alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe). Fue nombrado embajador en Brasil por el presidente Obama antes de su nombramiento como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, en 2016. Desempeñó sus cargos bajo gobiernos republicanos y demócratas, y estuvo involucrado en situaciones muy polémicas, entre las que se incluye el papel que jugó EE.UU. en el golpe militar en Honduras en 2009, y en los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los presidentes en el Gobierno de Brasil y Paraguay. Shannon estuvo implicado en las tumultuosas relaciones con Venezuela, que fueron deteriorándose progresivamente tras el apoyo de EE.UU. al breve golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002. (Shannon fue director de Asuntos Andinos de 2001-2002).

La dimisión de Shannon fue una más entre las muchas que se han producido en el Departamento de Estado durante el Gobierno de Trump, hasta dejarlo mermado y debilitado. En el siguiente texto, Mark Weisbrot imagina cómo asesoraría al embajador Shannon al nuevo secretario de Estado Mike Pompeo, basándose fundamentalmente en el destacado papel que jugó en la política estadounidense en este hemisferio en el siglo XXI.

La carta ilustra la continuidad entre las políticas de los dos Gobiernos anteriores en esta región y las del Gobierno de Trump. A su vez, documenta las diferencias de estilo entre las cualificadas maniobras diplomáticas por parte de cargos como Shannon, y la intervención a muerte y falta de preocupación por la percepción de las mismas por parte de la opinión pública del equipo de Trump. Si bien esta carta pertenece al género de la ficción, los acontecimientos y hechos que se narran en ella están bien documentados, son bastante reales y siguen en proceso.

2 de julio de 2018

Estimado secretario Pompeo:

Le mando saludos y espero que esté bien. Como sabrá, abandoné el Departamento de Estado después de casi 35 años de servicio el lunes 4 de junio. Me dirijo a usted para transmitirle algunas de las lecciones que aprendí durante esos años, a medida en que nos adentramos en una era nueva y profundamente distinta en las relaciones entre EE.UU. y América Latina. Por supuesto, soy totalmente consciente de que tendrá preocupaciones más urgentes en regiones del mundo mucho más peligrosas y volátiles. Y esa es una parte del desafío al que nos enfrentamos quienes nos encontramos a cargo del hemisferio occidental. Sobre todo durante y después de la guerra de Irak y de la etapa de inestabilidad creciente en Oriente Próximo que se inauguró a partir de entonces, no hemos prestado suficiente atención a América Latina. Como resultado de ello, durante la primera década del siglo, obtuvieron el gobierno en la mayor parte de los países latinoamericanos distintos gobiernos de izquierdas, no demasiado afines a la idea de un liderazgo de EE.UU. en dicho

hemisferio, ni en el resto del mundo. Como ya lo advirtiera el secretario Kerry en 2013, es nuestro “patio trasero”. Nuestra pérdida de influencia en la región llegó a ser desagradable en algunos aspectos, una consecuencia no intencionada de la fatídica guerra que desestabilizó Oriente Próximo, una “guerra elegida”, tan acertadamente criticada por el presidente Trump.

En la actualidad, esta situación ha cambiado drásticamente y, si me permite mi falsa modestia, en gran parte se debió al trabajo que hemos desempeñado durante los últimos veinte años. Hoy, América Latina es nuestra, como no lo ha sido desde hace décadas; incluso a pesar de que se haya perdido México, en los países más poblados de la región, incluyendo Brasil, Argentina, Perú y Colombia, contamos con gobiernos que nos prestan un apoyo sólido como hacía por lo menos varias décadas. Y el resto de países se han alineado de forma parecida. Si bien es cierto que quizá no fuera acertado que lo expresara públicamente el más alto cargo del cuerpo diplomático de la nación, el anterior secretario de Estado Rex Tillerson tenía bastante razón al referirse a la Doctrina Monroe.

Sin ánimo de aburrirle, me gustaría centrarme en algunos detalles de nuestra labor para lograr que se produjera este cambio histórico –sin atribuirnos todo el mérito, ya que no solo fue obra del Departamento de Estado, sino que dependió del esfuerzo de diversos departamentos de la seguridad de Estado, incluyendo al Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, 17 agencias de inteligencia y nuestros amigos del Congreso, en concreto, las comisiones de política exterior en ambos órganos. Con la alusión a dichos detalles pretendo ilustrar, en la medida en que me lo permiten estas breves líneas, la relevante continuidad en los objetivos y en la estrategia de nuestra política exterior en la región, sobre todo durante los 16 años de los dos gobiernos anteriores, es decir, las de los presidentes Barack Obama y George W. Bush, en las que jugué un papel relevante, y que ha seguido el Gobierno de Trump. Espero también poner de manifiesto el papel vital que juega la diplomacia para la consecución de nuestros objetivos a largo plazo.

Intentaré ser sincero en este punto, aunque, puesto que esta carta no ha sido clasificada como documento de alto secreto, y no podemos descartar las filtraciones, no divulgaré ninguna información clasificada, sino que me basaré en aquella que ya forma parte del dominio público.

Permítame que empiece por un acontecimiento en el que la diplomacia no es lo primero que le viene a uno a la cabeza: el golpe militar de 2009 que echó del gobierno a uno de nuestros adversarios, Manuel, Mel, Zelaya en Honduras. Como la mayor parte de los presidentes electos de izquierdas en Latinoamérica durante la “marea rosa” de la primera década de 2000, Zelaya no puso en práctica un programa político radical. De hecho, no era un político radical; provenía de la clase terrateniente y era un socialdemócrata moderado, defensor de políticas como el incremento del salario mínimo o los comedores escolares. Las corporaciones norteamericanas con base en Honduras, que en aquel entonces creaban decenas de miles de empleos manufactureros, no se sentían especialmente amenazadas por él, incluso a pesar de que no hubiera sido su primera opción en las elecciones.

Sin embargo, se convertiría en una amenaza por dos razones: la primera, porque empezó a hablar de la necesidad de convocar una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución en el país, una medida probablemente bastante razonable para la mayor parte de la población hondureña, dado que la Constitución vigente se aprobó en los años ochenta durante la dictadura militar y no es que fuera muy proclive a las medidas democráticas que se diga. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, no tenía ningún sentido redactar una nueva Constitución puesto que, muy probablemente, la nueva carta magna prohibiría las bases militares extranjeras en

el terreno nacional, como en el caso de otras aprobadas en el siglo XXI en países con gobiernos de izquierdas en América Latina. Podrá usted imaginar que el Pentágono, entre otros, no tenía intención de perder su mayor base militar en Centroamérica, sobre todo tras quedarse sin su base en Manta, Ecuador, después de que el Gobierno de Rafael Correa introdujera esta prohibición en su nueva Constitución de 2008. (Y Correa tuvo además la insolencia de restregárnoslo en las narices, diciendo que nos dejaría tener una base en Ecuador si les dejábamos tener una base suya en Miami).

La segunda razón favorable al golpe en Honduras fue que, desde nuestro punto de vista, Zelaya formaba parte de una alianza de todos los gobiernos de izquierda incluyendo a Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Nicaragua, en ese momento; El Salvador también acababa de elegir a su primer presidente de izquierdas y Michelle Bachelet, la socialista moderada chilena, se alineaba prácticamente siempre con los otros gobiernos de izquierdas en materia de asuntos del hemisferio. Es decir, aunque pueda parecer que un país pobre y con poco poder de influencia como Honduras no es relevante en el contexto más amplio de las cosas, cualquier jugador de ajedrez sabe la importancia que tienen los peones en una partida, sobre todo si uno los puede comer sin sufrir pérdidas materiales o perjudicar su posición. Y Zelaya se había unido a una subsección de países más de izquierdas todavía, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Venezuela, Bolivia y Ecuador a la cabeza. No obstante, en aquel momento todos estos países seguían una política exterior bastante parecida, denominada por los más lenguaraces como “antiimperialista”. Huelga decir lo que eso significa para nosotros.

En todo caso, nuestra labor diplomática fue vital para que el golpe fuera un éxito. La percepción del golpe no sería positiva: el presidente Zelaya fue sacado de su casa a primera hora de la mañana el 28 de junio de 2009, en pijama, puesto rumbo a Costa Rica, con escala en nuestra base militar al sur de Comayagua para repostar. Pero tuvimos la cautela de no respaldar el golpe, a la par que dejábamos caer a quien prestara atención a estos asuntos que contaba con nuestra bendición. En su primera declaración, la Casa Blanca no condenó la acción militar e hizo un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales en Honduras” a respetar la democracia. Puesto que era del dominio público que sabíamos que el golpe iba a tener lugar con antelación, el mero hecho de no condenarlo era un mensaje suficientemente claro para quienes entienden el lenguaje diplomático del siglo XXI. Los cuerpos diplomáticos y de inteligencia de todo el hemisferio lo interpretaron como un indicio de nuestro apoyo al golpe, y a partir de ahí, todos los acontecimientos fueron predecibles y previstos.

Hillary Clinton, secretaria de Estado en el momento del golpe, resumía en su libro *Decisiones difíciles*, publicado en 2014, lo que hicimos: “En los días siguientes [después del golpe] hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria [Patricia Espinosa] en México. Nosotros establecimos las estrategias de un plan para restaurar el orden en Honduras y garantizar que elecciones libres y limpias se celebren rápidamente y de manera legítima, lo que haría que la cuestión de Zelaya fuese irrelevante”. Detrás de todo ello hubo mucho trabajo diplomático. Teníamos que convencer al menos a una parte del mundo, incluyendo a los medios, de que lo mejor para Honduras era aceptar sin más que el presidente democráticamente electo se hubiera marchado y de que, a pesar de la represión ejercida por el Gobierno golpista – arrestos masivos, violencia por parte de las fuerzas de seguridad, supresión de los medios de la oposición, escuadrones de la muerte – era preciso convocar elecciones lo antes posible, pero evitando el regreso de Zelaya.

Algunos republicanos en el Congreso contribuyeron a la estrategia adoptando una posición mucho más dura que la nuestra, que, en comparación, parecía moderada. Apoyaron abiertamente el golpe y culparon a Zelaya de pretender utilizar el

referéndum para prolongar su permanencia en el Gobierno, y convertirse en un “dictador” como Hugo Chávez. Desde el Departamento de Estado también estábamos presionando a Zelaya para que no convocara el referéndum. (El tope de una legislatura de mandato impide la acumulación de poder y el giro sustancial de las políticas de cualquier presidente; son hombres de paja desde el minuto uno.) El caso es que, en realidad era imposible que Zelaya gobernara otra legislatura por una cuestión cronológica, independientemente del referéndum. Además, no era vinculante y ya era demasiado tarde para que Zelaya pudiera cambiar la Constitución antes de las siguientes elecciones. La aprobación de una nueva Constitución podría incorporar que los futuros presidentes pudieran gobernar durante dos legislaturas, pero no Zelaya. Sin embargo, la mayor parte de los medios adoptaron el relato, lo cual nos permitió que su destitución pareciera un hecho más aceptable.

Finalmente, como destacaba Clinton, pudimos evitar la vuelta al poder de Zelaya y legitimar las elecciones de noviembre de ese año, que consolidaron al gobierno posterior al golpe, y que para muchos era una dictadura. Todo ello a pesar de que la OEA y la UE se negaron a enviar observadores durante la convocatoria electoral, y aunque la gran mayoría de gobiernos del hemisferio no la reconocieran. Pero nosotros nos impusimos y mediante un ejercicio cuidadoso y persistente de diplomacia logramos que la situación se normalizara.

La historia del éxito de nuestra estrategia en Honduras no termina aquí: el mes de noviembre pasado, el Partido Nacional en el Gobierno durante el golpe anunció la reelección de su candidato presidencial en unas elecciones que muchos –incluyendo esta vez a la vasta mayoría de los periodistas internacionales– veían como robadas. Luis Almagro, nuestro firme aliado a la cabeza de la OEA dio un paso poco habitual y pidió que volvieran a convocarse las elecciones. Pero, una vez más nuestra diplomacia se impuso. Pedimos a México que fuera el primer país en reconocer las elecciones, y así fue; nosotros “seguimos” su ejemplo. El asunto no tardó en enterrarse, junto con las noticias sobre los asesinatos políticos y la represión bajo el gobierno de Hernández, por no mencionar las conexiones con los traficantes de drogas. Y, por supuesto, Almagro y la OEA no tardaron en retroceder en sus posiciones. (Aportamos más del 40% del presupuesto de la OEA, entre otras muchas vías de influencia con las que contamos allí).

El asesinato de la activista ecologista Berta Cáceres fue un quebradero de cabeza para nuestras relaciones públicas. Había sido galardonada con el Goldman Prize tan solo un año antes, y contaba con apoyos de ámbito internacional, por lo que obviamente su muerte ocupó las noticias en mucha mayor medida que la de cientos de ecologistas y otros activistas y líderes disidentes asesinados, con total impunidad, desde el golpe. Además, cuatro de los nueve arrestados acusados de participar en el crimen estaban vinculados al Ejército, institución en la que hemos invertido mucho. En marzo, tuvo lugar el arresto del supuesto “autor intelectual” del crimen que, lamentablemente, era un oficial de inteligencia afín a nuestra embajada. Todo ello provoca el envío de diversas cartas por parte de muchos miembros del Congreso y propuestas de medidas legislativas pero, gracias a nuestra diplomacia pública, se pudieron minimizar los daños y seguimos con el control de la situación. Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt, puede que Hernández sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y Honduras sigue siendo nuestro, como lo fuera en la década de los ochenta, cuando lo utilizábamos como base de operaciones de nuestras guerras para mantener en nuestra órbita a Nicaragua y El Salvador.

Por supuesto, Honduras es un país pequeño y pobre, pero como ya he mencionado, tiene una importancia estratégica para nuestras bases militares y es clave en nuestra estrategia general de control de las Américas. No obstante, en los últimos años

nuestra estrategia de contención y retirada nos ha resultado también beneficiosa. Veamos por ejemplo el caso de Brasil, el segundo país del hemisferio en términos económicos y demográficos, con una extensión territorial mayor que EE.UU. continental. En 2002, se produjo la toma de poder del izquierdista Partido de los Trabajadores, y Lula da Silva obtuvo la presidencia después de cuatro intentos. Su Gobierno había obtenido tanta popularidad que no solo resultó reelegido y abandonó su cargo después de ocho años de gobierno con el apoyo del 87% de la población, sino que su sucesora, Dilma Rousseff, también resultó electa y reelecta.

Sin embargo, miren cuál ha sido su suerte: Dilma Rousseff fue destituida en 2016 y Lula está encerrado en una celda de 3 x 4 metros, acusado de corrupción y blanqueo de dinero. Brasil es nuestro, incluso más nuestro que durante la dictadura militar que contribuimos a instaurar en 1964. A fin de cuentas, se trataba de un Gobierno desarrollista y nacionalista, que nos desafiaba con el desarrollo de su propia industria tras las barreras proteccionistas; en cambio, en la actualidad, sus líderes hacen todo lo que está en su mano para obtener inversión extranjera y pretenden librarse de todas las empresas de propiedad estatal que puedan mediante privatizaciones.

Si apostamos por los nuevos líderes brasileños no ha sido por razones corporativas, como defienden muchos de nuestros adversarios. Nuestros intereses son mucho más amplios y son geopolíticos mientras EE.UU. siga siendo “la nación indispensable”. Y Brasil siempre será un país influyente, a pesar de su lamentable gestión económica durante casi cuatro décadas; por lo tanto, necesitan un gobierno de nuestro equipo. De hecho, Brasil mejoró su influencia en el ámbito internacional bajo el Gobierno de Lula. En 2010 se produjo un incidente que ilustra muy bien por qué es tan importante mantener nuestra influencia en Brasil y en América Latina en general, y en particular, lograr que su política exterior sea coherente con la nuestra. Ese es el objetivo que no debemos perder de vista, y no su propia política económica interna y ni siquiera sus políticas hacia las corporaciones estadounidenses.

En mayo de 2010, Lula se unió a Turquía, Irán y Rusia para llegar a un acuerdo de canje de combustible nuclear con la intención de intentar resolver nuestro conflicto nuclear con Irán. Si bien el presidente Obama había pedido a Lula mediar en otro momento para alcanzar este tipo de acuerdo, lo cierto es que en ese preciso instante, no nos interesaba. No me voy a adentrar en las razones, tan solo decir que los comunicados de prensa que afirmaban que habíamos cambiado de opinión debido a las elecciones en ciernes en EE.UU. eran más que exagerados. En todo caso, el malestar de los brasileños fue bastante explícito puesto que comunicaron a los medios la anterior iniciativa de Obama y, en respuesta a nuestra negación de la misma, publicaron la carta en la que se planteaba la propuesta. Huelga decir el malestar que este episodio provocó en Washington, tanto fuera como dentro del Gobierno, y lo cierto es que a partir de ese momento las relaciones con Brasil ya nunca fueron lo mismo. Obviamente, nuestra oposición puso fin al acuerdo, de modo que no hubo que lamentar muchos daños. Sin embargo, he querido llamar la atención sobre este episodio fundamentalmente para insistir en la importancia de evitar que este tipo de gobiernos se desvíen –cuando empiezan a poner en práctica sus propias políticas exteriores, pueden dañar enormemente nuestros intereses más relevantes, en este caso en Oriente Próximo– a pesar del hecho de que, salvo Cuba durante la crisis de los misiles, ningún país latinoamericano ha supuesto una verdadera amenaza directa a nuestra seguridad.

Obviamente, es un ejemplo de los muchos problemas que nos causó el Gobierno del PT. Hay que decir que son buenos diplomáticos y que el ministro de Asuntos Exteriores brasileño es un profesional y uno de los más competentes de América del Sur. Llegué a conocerle bastante bien, no solo como subsecretario adjunto de Asuntos

del Hemisferio Occidental sino como embajador de Brasil entre 2010 y 2013. En algunas ocasiones nos ayudaron, sobre todo cuando lideraron la ocupación de Haití por parte de la ONU en 2004, después de que lográramos librarnos del presidente Aristide (por segunda vez; el primer golpe que contribuimos a sacar adelante fue en 1991). Retomaré este instructivo episodio más adelante.

Lula mantuvo una buena relación con el presidente Bush, mejor que con Obama, a pesar de las muchas diferencias con el PT. Es preciso tenerlo en cuenta en el proceso de negociaciones del Gobierno de Trump con Andrés López Obrador (AMLO) quien, como Lula, probablemente marcará un rumbo de moderación y pretenderá conciliar las demandas de la mayoría de sus votantes con la élite tradicional de su país. Las relaciones entre el presidente Obama y Dilma se agriaron un poco en 2013 cuando los documentos de Snowden revelaron que Brasil era el objetivo prioritario de espionaje de EE.UU. en América Latina, incluyendo el control de las llamadas personales de Dilma, o algo más peliagudo, el espionaje de Petrobras, la compañía nacional petrolífera brasileña. Un caso de espionaje industrial para muchos en el país. La reacción de Dilma fue cancelar el viaje que tenía planeado a EE.UU. y dar un discurso en la Asamblea General de la ONU bastante hostil hacia nosotros, que mantuvimos la calma y no emitimos respuesta alguna.

En 2014, durante la segunda legislatura de Dilma, arrancó la profunda recesión de la economía brasileña. La oposición aprovechó su descenso de popularidad y se esforzó por poner fin a su mandato, algo que logró dos años más tarde. Su destitución no fue provocada por ningún acto que constituyera un crimen en Brasil sino que fundamentalmente fue una maniobra contable que también habían utilizado anteriores presidentes y gobernantes, y que nada tenía que ver con la corrupción u otros delitos. Por supuesto, no tomamos posición en este caso y declaramos públicamente que se trataba de un asunto interno. Pero tuvimos oportunidad de contribuir al cambio de régimen de muchas maneras relevantes, en alguna medida de forma similar al caso del golpe en Honduras en 2009. En este sentido, lo más relevante fue emitir la señal a todos los actores más importantes de Brasil, incluyendo los medios, de que apoyábamos la destitución de Dilma. Tuvimos oportunidad de dejarlo bien claro en el momento de la visita a Washington de Aloysio Nunes, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Brasil, justo después de que la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Brasil votara la destitución de Dilma. Aquella votación fue un espectáculo bochornoso; los miembros más beligerantes del Congreso expresaron su nostalgia por la dictadura militar e incluso uno de ellos llegó a alabar a los funcionarios responsables de las torturas que sufrió la propia Dilma en el pasado. Aquello provocó que una parte de los medios internacionales, bastante hostiles a Dilma y al PT, reconsideraran el sesgo de sus informaciones. No obstante, yo me entrevisté con Nunes, que lideraba la iniciativa de destitución en el Senado brasileño. Dada mi posición en aquel momento (el número tres en el Departamento de Estado) y que para muchos, yo era responsable de nuestra política en Brasil, todos entendieron que aquella reunión con él era como mínimo una muestra de nuestro apoyo a la destitución.

El Secretario de Estado John Kerry respaldó esta opinión unos meses más tarde, el 5 de agosto, en una rueda de prensa conjunta con José Serra, el entonces ministro de Exteriores de Brasil, en la puerta de la embajada de Estados Unidos. Sus declaraciones iban encaminadas a fortalecer la relación entre EE.UU. y Brasil y velar por la cooperación en una serie de asuntos, como no habían podido hacer en los últimos años (ya se encargó de destacarlo Kerry). Pero el Senado brasileño tenía que votar aún la destitución de Dilma (su Constitución es similar a la nuestra, la Cámara vota la destitución, y el Senado destituye al presidente). De modo que la conferencia

de prensa con Serra suponía otro indicio evidente de nuestra inclinación por la destitución de Dima.

Como ya he comentado anteriormente, a pesar de nuestras diferencias, Brasil nos apoyó en el golpe de 2004 en Haití. Habíamos aprendido la lección tras el golpe de Venezuela de 2002 que duró 48 horas. Y, en parte, la responsabilidad de que así fuera, como probablemente ya sepa usted, se debió a la celebración de la cumbre del Grupo de Río de 19 países latinoamericanos justo después del golpe, en la cual se aprobó una resolución reprobatoria del golpe. Si bien algunos países latinoamericanos hubieran querido apoyarnos, eso les habría puesto en una situación delicada dada la sacrosanta soberanía nacional histórica en la región y que nuestro apoyo al golpe se había hecho público. (Esta es otra de las razones por las que conviene ser más cauteloso y diplomático con respecto a los comentarios públicos, como lo fuimos en el caso del golpe en Honduras. Las declaraciones públicas del presidente Trump sobre las potenciales acciones militares de EE.UU. en Venezuela, o por parte de otros oficiales que apoyan el golpe militar en el país, son innecesarias y, en mi opinión, contraproducentes).

En todo caso, nuestra experiencia en Venezuela nos sirvió para no repetir errores, y en Haití teníamos preparada la votación en la ONU para apoyar un operativo militar antes de que se produjera la destitución de Aristide. Dos meses después, impulsamos una nueva misión de la ONU (MINUSTAH) con tropas brasileñas a la cabeza. Durante la ocupación del país, se produjeron miles de asesinatos de personas desarmadas favorables a Aristide y cargos del gobierno constitucional fueron encarcelados. Pudimos sacar adelante la iniciativa a plena luz del día, no como en 1991, cuando tanto el respaldo de Estados Unidos al golpe como los escuadrones de la muerte posteriores fueron encubiertos. Y hemos podido cambiar el rumbo de la historia en Haití desde entonces, hasta el punto de que no parece previsible en el futuro que pueda llegar a elegirse a nadie que no cuente con nuestra aprobación. (De hecho, el 80% de la población haitiana ya ni siquiera se molesta en participar en las elecciones nacionales.) Hemos recibido muy pocas críticas por nuestros actos allí, incluso después de que lográramos que la OEA revertiera los resultados en las elecciones de 2010 sin que se realizara siquiera un recuento ni un análisis estadístico del voto; un caso sin precedentes en la historia de la observación electoral. Tras el terremoto devastador de 2010, cuando Haití estaba en una situación de particular vulnerabilidad, amenazamos a los líderes recalcitrantes con cortar toda ayuda, extremadamente necesaria entonces, si no aceptaban la decisión de la comisión de la OEA, que por supuesto estaba plagada de aliados nuestros. Habíamos amenazado previamente al presidente Preval con abandonar el país como en el caso de Aristide en 2004.

Ofrezco esta pequeña parte de la historia de nuestro papel en Haití porque sirve para ilustrar una vez más el poder de la diplomacia, no solo en la construcción de la ocupación de la ONU con Brasil a la cabeza, sino durante aquellos cuatro años previos al golpe. Durante cuatro años logramos convencer a casi todos los gobiernos del mundo para que interrumpieran el envío de ayuda internacional a Haití, sin la cual la supervivencia del Gobierno electo estaba en juego. Para ello, tuvimos que convencer primero a la OEA de que cambiaran la inicial declaración positiva de la misión de observación de las elecciones de 2000 que habían descrito como “un gran éxito para la población de Haití, que salió a votar ordenada y masivamente para elegir a sus gobiernos local y nacional”. Aquella declaración revisada se convirtió en la base de nuestra campaña para destituir al Gobierno. A continuación, fundamos una gran coalición de grupos de la oposición y anunciamos que la financiación internacional no se restablecería hasta que el Gobierno no alcanzara un acuerdo con la oposición. Al mismo tiempo, le dijimos a la oposición que no alcanzara semejante acuerdo, y que el Gobierno acabaría cayendo, como por supuesto pasó.

Algunos han afirmado que la única razón por la que este tipo de tácticas nos permitieron salirnos con la nuestra es porque Haití es un país pobre, y su población negra. Indiscutiblemente, algo tuvo eso que ver, como confirmaría cualquier conocedor de la historia de la implicación de EEUU en Haití desde que los marines norteamericanos ocuparan el país desde 1915 a 1934. Pero también se trata de un país que se fundó gracias a una revuelta de los esclavos, y con una población capaz de echar a Duvalier, el dictador respaldado por EE.UU.; que eligió en dos ocasiones, y por una amplia mayoría, a un sacerdote populista radical que no respetaba nuestros intereses; y en el que podía estallar la revuelta en cualquier momento –sin mucha clase media con algo que perder– si no éramos capaces de manejar con cuidado la situación en momentos decisivos.

Todos los antecesores del presidente Trump fueron capaces de entender estas características específicas de Haití en el momento de sendos golpes de Estado apoyados por los presidentes Bush, y la intervención en 2010-2011 bajo el Gobierno del presidente Obama. El presidente Clinton también supo comprender esto muy bien: aunque los acontecimientos acabaran encajonándole, sobre todo por el Congressional Black Caucus, y acabara restableciendo a Aristide en el poder con el ejército de Estados Unidos en 1995. Pero obligó a Aristide a aceptar importantes condiciones a cambio de su regreso. Una, que mantuviera al tristemente célebre ejército de Haití, fundamentalmente una fuerza represiva, para enfrentarse a la amenaza de una posible insurrección. Por desgracia, Aristide renegó de esta promesa y abolió el Ejército. Pero, como habrá podido comprobar, nuestro nuevo Gobierno allí está intentando recuperarlo, si bien desafortunadamente incluyendo a algunos de los asesinos en masa de los años noventa, y que dejará vía libre a las críticas de nuestros oponentes.

Retomemos el marco más amplio. Los gobiernos de izquierdas cambiaron los usos y costumbres del hemisferio en materia internacional hasta el punto de minar seriamente nuestro poder de influencia. Por ejemplo, establecieron la UNASUR como organización multilateral independiente dominada por los entonces gobiernos de izquierdas, incluyendo los de los países más grandes como Brasil, Venezuela y Argentina. Impidieron nuestros intentos de enfrentar este desafío por parte de la izquierda en numerosas ocasiones. En 2009 quisimos ampliar nuestra presencia militar en Colombia a causa de la creciente amenaza que suponían estos gobiernos. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, era un aliado acérrimo de EE.UU. y a quien habíamos brindado nuestro apoyo con miles de millones de dólares en ayuda militar (si bien él de por sí tenía ya fuertes vínculos con los cárteles de la droga y los paramilitares que habían asesinado a decenas de miles de civiles). Aceptó nuestra petición de buen grado, pero se filtró a la prensa el acuerdo militar entre Colombia y EE.UU., en el que se detallaban nuestros planes de ampliar el acceso de Estados Unidos a siete bases militares colombianas.

Los gobiernos de la UNASUR, que se reunieron en Argentina en 2009, mostraron su inmediata oposición y declararon públicamente que no podrían utilizarse las bases militares para mandar operativos desde Colombia, algo que apoyó también este país. Obviamente, ese era el objetivo principal del acceso a las bases militares por parte del personal del ejército de Estados Unidos, incluyendo hacer frente a las amenazas planteadas por los Gobiernos anti americanos.

UNASUR, liderada por los gobiernos de izquierda, cambió los usos y costumbres de las relaciones internacionales en el hemisferio hasta el punto de que incluso Manuel Santos, el anterior ministro de Defensa de Uribe, restableció las relaciones con Venezuela inmediatamente después de asumir su cargo en 2010. Las relaciones entre Colombia y Venezuela (y con otros países) se habían deteriorado gravemente

después de que Uribe bombardeara e invadiera Ecuador en marzo de 2008 para atacar los campamentos de las FARC con base allí. Al verse forzado a elegir entre la coalición de izquierda, integrada por los gobiernos antinorteamericanos de Sudamérica, y EE.UU., optó por los primeros.

Pero Santos no tardó en volver a nuestro lado cuando recuperamos el control de esa región y, revirtiendo por completo la situación de derrota de 2009, a finales de mayo Colombia se convirtió en socio global de la OTAN, el primero en América Latina. Esto tuvo unas implicaciones significativas para nuestro poder de influencia en América Latina, como podrá imaginarse. El 17 de junio, Iván Duque, el sucesor de Uribe elegido a dedo, obtuvo una cómoda victoria en las elecciones presidenciales. Colombia es nuestra.

Otro cambio institucional rebelde orquestado por los gobiernos de la izquierda durante sus años álgidos fue la creación de la CELAC, que incluye a todos los países del hemisferio salvo EE.UU. y Canadá. En parte, se formó en respuesta al éxito de nuestras labores diplomáticas con motivo del golpe en Honduras, cuando evitamos que la OEA jugara un papel más relevante a la hora de restablecer el gobierno electo, que era lo que querían la mayor parte de los países de la OEA. Durante algunos años, la CELAC sirvió como lugar de encuentro de las naciones latinoamericanas y caribeñas para acordar algunas posiciones comunes antes de incorporarse a la OEA para luchar contra nosotros. Como es obvio, ya no supone ningún tipo de amenaza, ahora bien convendría tener en cuenta que cuando los chinos visitaron este hemisferio en 2015 para reunirse con líderes latinoamericanos para abordar el tema de los préstamos y de la inversión extranjera, fue a través de la CELAC.

Argentina ha sido otro de los países más determinantes a la hora de influir en la rebelión antinorteamericana durante la primera década del siglo XX. De 2003 a 2015 estuvieron en el gobierno los Kirchner, populistas de izquierda, primero Néstor y después su mujer Cristina Fernández. Ambos mantenían una relación bastante buena con Chávez, que prestó 6 mil millones de dólares a Argentina para que saldara la deuda con el FMI (a quien culpaban de su crisis entre 1998-2002). Sin embargo, este vínculo entre presidentes izquierdistas estaba mediado por algo más que los petrodólares. La historia tiene su importancia. Los Kirchner tenían amigos que habían sido encarcelados o asesinados durante la dictadura de 1976-1983 que nosotros respaldamos; revocaron la impunidad de los oficiales del Ejército responsables de estos asesinatos y más de 650 fueron condenados. El encarcelamiento de Lula se produjo bajo la dictadura que Estados Unidos ayudó a llegar al poder con el golpe de 1964; su sucesora, Dilma Rousseff pasó aún más tiempo en la cárcel y fue además víctima de torturas. Evo Morales, de Bolivia, declaró que había sido torturado en presencia de agentes de la DEA antes de ser presidente; Pepe Mujica, de Uruguay, pasó 13 años en prisión bajo la dictadura respaldada por EE.UU. Y, quienes no habían sufrido las consecuencias directas de la violencia ejercida por estos gobiernos auspiciados por Estados Unidos, eran conscientes del dolor provocado por esta parte de la historia.

Fueron diversos los mecanismos por medio de los cuales fuimos capaces de contribuir a la caída del kirchnerismo en Argentina. Si bien es cierto que a Argentina le fue extremadamente bien bajo el gobierno de los Kirchner hasta 2011, se produjo una desaceleración económica a partir de entonces y su balanza de pagos empezó a sufrir las consecuencias. No podían pedir préstamos a los mercados internacionales por su impago de 95.000 mil millones de dólares. Impedimos su acceso al mercado de divisas que tanto necesitaban recibir de los prestamistas multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Entonces, sucedió que en 2014 recibimos una ayuda muy especial por parte de las autoridades judiciales de EE.UU.,

cuando el juez Thomas T. Griesa tomó la decisión tan controvertida y sin precedentes de prohibir a Argentina el pago de más del 90 % a sus acreedores, los titulares de bonos reestructurados ante el impago de la deuda del país. El resto correspondía a la deuda con los acreedores que jamás aceptaron la reestructuración, entre los que se incluyen los fondos buitres, hedge funds, que compraron los bonos moratorios por una fracción mínima de su valor nominal dentro de una estrategia legal prolongada con el fin de anteponer una demanda para recuperar su valor nominal total.

En 2014, Argentina había llegado a un acuerdo con el Club de París integrado por acreedores gubernamentales y estaba a punto de recuperar su capacidad de préstamo en el ámbito internacional. Pero el requerimiento de Griesa fue un duro golpe en un momento de vulnerabilidad. Retiró la orden en cuanto el conservador Mauricio Macri fue elegido presidente y declaró: “La elección del presidente Macri cambió todo”.

Hemos de admitir que no fue una buena decisión por parte de Griesa desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero internacional. Supuso que aquellos gobiernos que habían alcanzado acuerdos con más del 90% de sus acreedores tras una situación de impago podrían ver sus acuerdos anulados años más tarde por las acciones legales de los fondos buitres. Por esta razón, y porque el Departamento del Tesoro de EE.UU., principal agente en la toma de decisiones del FMI fuera de Europa, no se coordinó con nosotros, el FMI anunció en julio de 2013 que presentaría un escrito en nombre de Argentina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, se retractó una semana más tarde. Cuando un periodista preguntó por las razones para este desconcertante cambio de opinión, el portavoz del FMI, visiblemente molesto, respondió: “Tendrá usted que pedirle explicaciones al Tesoro norteamericano”.

Traigo este episodio a colación porque muestra lo importante que es tener en cuenta las diversas ramificaciones de nuestro Gobierno a la hora de pergeñar nuestra política exterior. Logramos contribuir a la caída del kirchnerismo en las elecciones de 2015, si bien estuvo a punto de ganar un mejor candidato presidencial de su bando. Pero ahora tenemos a Mauricio Macri de presidente, un sólido aliado de EE.UU. años ha. En 2009 se reunió conmigo y con nuestra embajada en Buenos Aires para alertarnos de que estábamos siendo demasiado blandos con los Kirchner, sobre todo tras la humillación que había sufrido el presidente George W. Bush en el Mar del Plata. En la actualidad, forma parte de nuestra coalición de gobiernos de derechas en la región y está contribuyendo a derrocar al Gobierno venezolano, en la cuerda floja a causa de la hiperinflación y una crisis profunda.

Podría contarle mucho más acerca de Venezuela pero voy a intentar ser breve en ese sentido. Como ya sabrá, durante la mayor parte de el siglo XXI su cambio de régimen ha sido el objetivo número uno o dos en el mundo (tan solo precedido por Irak o Irán en algunos momentos). Claramente, el país fue el principal instigador de la rebelión latinoamericana, aunque era Chávez el que principalmente gritaba a los vientos lo que el resto de presidentes de izquierdas, o no tan de izquierdas, pensaban y sentían. Además, ejercía su cargo sentado sobre 500.000 millones de barriles de petróleo, la mayor reserva petrolífera del mundo. Cuando intentamos librarnos de él con el golpe militar de 2002, muchos pensaron que lo que queríamos era obtener su petróleo, pero por supuesto estaban equivocados. De hecho tanto Chevron como Exxo Mobil, nuestras mayores compañías petrolíferas, mantenían una buena relación con Chávez durante la mayor parte de su mandato, y lo que querían es que le dejáramos en paz. Habían invertido mucho allí, y les seguía resultando rentable incluso después de que Chávez incrementará la parte para el gobierno, como hizo todo el mundo tras el aumento de los precios del petróleo a partir de 2002.

Sin embargo, nosotros tenemos una visión geoestratégica y cualquier país que disponga de tal cantidad de petróleo tenderá a convertirse en una potencia en la región y a gozar de una cierta independencia, por lo tanto, es fundamental que su Gobierno esté de nuestro lado. De modo que forramos de dinero a la oposición que durante los primeros cuatro años de su mandato tenía “una estrategia de derrocamiento militar”, como diría uno de sus líderes más intelectuales. Afortunadamente, los medios tanto de Estados Unidos como internacionales estaban totalmente de nuestro lado, de modo que durante más de una década y media nuestra implicación en el golpe ha sido tratada como una mera acusación por parte de una fuente desacreditada, fundamentalmente el propio Chávez, aunque también por parte de su sucesor, Maduro, aún más desprestigiado. Obviamente, todos los reporteros de Caracas sabían que era cierto, pero se abstuvieron de comunicarlo. Incluso cuando nuestro propio Departamento de Estado reconoció que el Gobierno estadounidense “estaba proporcionando formación, asesoramiento institucional y otro tipo de apoyo a personas y organizaciones activamente implicadas en el golpe militar”. O cuando se divulgaron los documentos de la CIA que mostraban que teníamos información anticipada sobre el golpe y que habíamos apoyado su éxito con falsas declaraciones durante los acontecimientos que tuvieron lugar. Este no es más que uno de los miles de ejemplos en los que los medios nos han brindado su apoyo en nuestra ardua tarea, pero creo que ilustra con mayor claridad que otros hasta qué punto es importante nuestra diplomacia pública, incluso a pesar de que el golpe fracasara por un error de planificación. El éxito de nuestra estrategia supuso que Chávez siempre apareciera ante la opinión pública como el agresor cada vez que denunciaba la intervención de EEUU, incluso a la par que estábamos lanzando decenas de millones de dólares a los grupos de la oposición (contando solo con la cuantía que era de dominio público), y no cesábamos en el empeño de intentar aislar a su régimen en el ámbito internacional.

Chávez era un duro contrincante, ya que la situación económica del país fue relativamente buena durante su último año de mandato (2012) y logró que por primera vez millones de venezolanos tuvieran acceso a la sanidad, las pensiones, la educación superior y la vivienda pública. (Obviamente, durante todos esos años los principales medios se encargaron de describir a Venezuela como un fracaso del populismo. Y, a pesar de que la mayor parte de los venezolanos se informaban a partir de fuentes controladas por la oposición, la mayor parte del hemisferio fuera de las fronteras venezolanas compró el relato de que la Venezuela de Chávez era una dictadura).

Chávez no cesó en el intento a escala internacional de convertir en realidad su sueño bolivariano de unidad de los países latinoamericanos contra EE.UU., y prestó decenas de miles de millones de dólares a países como Brasil, Argentina y a estados Caribeños a través de su programa Petrocaribe. En algunos casos, la cuantía de la ayuda por parte de Venezuela al resto de países latinoamericanos probablemente superó la nuestra. De modo que, durante los años de bonanza, la mayor parte de los gobiernos del hemisferio adoraban a Chávez tanto como la mayoría de los venezolanos, incluso a pesar de que la mayor parte de la población latinoamericana, que solo accedía a la versión que los medios divulgaban de la realidad venezolana, no tuviera muy buena opinión de él.

La situación se deterioró después de su muerte en marzo de 2013 y la situación económica inició un largo declive que ha desembocado en la peor crisis en la historia de Latinoamérica. Es innecesario que te cuente lo mal que están las cosas allí en la actualidad dada la hiperinflación y la carestía de medicamentos y alimentos.

Por eso me opuse al embargo financiero del Gobierno de Trump impuesto sobre Venezuela antes de su anuncio público el 24 de agosto del año pasado. No es que no comparta sus objetivos de librarse de esta maldición, hemos trabajado

incansablemente para llevarlos a buen puerto durante casi dos décadas. No obstante, el embargo es innecesario llegados a este punto y Maduro puede recurrir a él para explicar las razones de tanta escasez, a la que obviamente contribuye. Dado que no pueden acceder a préstamos, tuvieron que recurrir al pago de sus bonos en 2017. No pueden reestructurar su deuda. Se ha cortado el acceso a muchos créditos, incluso aquellos que no han resultado prohibidos por la orden del ejecutivo de Trump, y ello contribuye al colapso de la producción petrolera y a la escasez de medicinas y alimentos.

Es excesivo. Este tipo de intervención otorga credibilidad a la victimización por parte del Gobierno entre una minoría de la población venezolana. Y para mucha gente a lo largo del mundo este embargo empeora la crisis humanitaria. Afortunadamente, nuestra paciente construcción de una diplomacia pública ha permitido que los medios hayan ignorado el impacto del embargo en igual medida que ignoraron nuestros mecanismos de intervención previos. Y son los medios los que determinan lo que cree la mayoría de la gente, sobre todo si tiene que ver con algo que no experimentan directamente. Pero, el embargo es totalmente innecesario porque la espiral de declive de la economía se produce por sí sola.

Las amenazas emitidas por el Gobierno de Trump, o por parte del senador Rubio, influyente asesor en esta materia, son también innecesarias y contraproducentes. Incluyendo las insistentes declaraciones de Rubio sobre que las sanciones van dirigidas a propiciar un cambio de régimen y no a presionar al Gobierno para restablecer la democracia, que es el mensaje emitido por el portavoz de nuestro Departamento de Estado. Y, la amenaza del presidente Trump de una acción militar es intolerable; viola la Carta de la ONU e incluso ha avergonzado a nuestros aliados más cercanos en la región, que han expresado su oposición a estas declaraciones.

Lidiamos con Chávez cuando estaba en lo más alto de su ejercicio del poder y de influencia en la región, cuando la mayor parte de los gobiernos de América del sur eran sus aliados. No hay mal que por bien no venga. Quizá no pudiéramos destituirle pero sí demonizarlo hasta el punto de que su compañía resultara tóxica para los políticos del hemisferio asociados con él. Y nos servimos de esa toxicidad para contaminar e incluso derrocar a los candidatos presidenciales en una serie de elecciones, incluyendo las de Nicaragua, El Salvador, Perú y México. Ganamos las elecciones en México en 2006 por los pelos, por unos escasos 0,6 puntos porcentuales, en unas elecciones en las que el “recuento” de la mitad de las urnas dio problemas, es decir, el número de votos emitidos más los votos en blanco no correspondían con el número de votantes registrados. Y una de las razones por las que ganamos fue porque los medios atacaron sin descanso la candidatura izquierdista de Andrés López Obrador (AMLO), vinculándole con Chávez (incluso a pesar de que en este caso no había conexión alguna entre ellos).

La victoria de AMLO ha sido aplastante y su partido, que ni siquiera existía hace apenas siete años, ha obtenido la mayoría en el Congreso. Esto supone una enorme pérdida para nosotros. Es obvio que sus programas político y económico son moderados, y estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo razonable sobre el NAFTA. Sin embargo, es un independentista populista y nacionalista como los que nos han estado dando la lata en Suramérica y Centroamérica y no apoyará nuestra política exterior como lo hace el actual gobierno, y eso es lo verdaderamente importante. Ya ha quedado suficientemente claro que no nos va a prestar ayuda en absoluto para cambiar el régimen ni en Venezuela ni en Nicaragua, por ejemplo. Y, en este sentido, le pido que me excuse, voy a decir una obviedad: los ataques verbales a México por parte del presidente Trump, su propuesta de muro “que pagarán los mexicanos”, y otras expresiones públicas de hostilidad, probablemente han contribuido a explicar el

meteórico ascenso del nuevo partido de AMLO. Por no mencionar el fracaso a largo plazo de nuestra política de seguridad en el país, la militarización de “la guerra contra la droga” y otros errores cometidos por anteriores administraciones, sobre todo en materia de política económica y que se remontan a los años ochenta. Y el intento de culpar del éxito de AMLO y Morena a la supuesta interferencia de Rusia, por parte del general McMaster y otros, no logró engañar a muchos mexicanos, aunque les diera bastante juego en casa.

Por lo tanto, debo concluir pidiéndole que peque de exceso de cautela cuando tenga que enfrentarse a este tipo de retos, en lugar de encender las pasiones del nacionalismo y del sentimiento antiamericano que puede cambiar el sentido de la disputa electoral en América Latina. A lo largo del siglo XXI fundamentalmente ha sido la izquierda la que ha enarbolado la bandera de la soberanía nacional y de la autodeterminación, creencias muy enraizadas en los países en desarrollo, cosas por las que la gente en ocasiones está dispuesta a luchar y a morir, y que tienen una base racional. La democracia en un país que no es soberano será muy precaria, en el mejor de los casos, por no hablar de la integridad de sus elecciones, la independencia del sistema judicial o del Estado de derecho a los que pueda aspirar. Muchos son los que atribuyen parte de la explicación de la inmensa diferencia entre la tasa de crecimiento y los niveles de vida en Asia y en América Latina al grado de soberanía nacional. Pero Washington no ha entendido del todo este tipo de creencias ni lo arraigadas que están entre la población de muchos lugares. Y, allá donde más las hemos subestimado, nos hemos enfrentado a nuestros mayores fracasos y derrotas, desde Vietnam hasta Irak (y lo que probablemente está por llegar en Oriente Medio).

Le hemos dejado una América Latina controlada en su mayor parte por aliados leales a los Estados Unidos: Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Honduras y más. Contamos con los 13 países del Grupo de Lima que han exigido la imposición de sanciones financieras contra Venezuela, algo inimaginable tan solo hace unos pocos años. Ni siquiera en el momento del golpe de Estado en Honduras en 2009, que indignó a líderes de todo el espectro político, se oía hablar de sanciones, así de fuerte es la tradición latinoamericana de no intervención los asuntos de otros Estados.

Logros aún más notables a la luz de las cartas que nos tocaron en la partida de la primera década de este siglo. Si tomáramos una instantánea del actual paisaje, bien pudiera parecer que es el orden natural de las cosas. Pero espero que vea que no tiene por qué ser así. Cultivamos este delicado jardín a base de paciencia diplomática, incluyendo la diplomacia pública necesaria para que nuestro mensaje y nuestra explicación de toda una variedad de conflictos domine los medios de comunicación de masas, a veces alcanzando una notable uniformidad. Como verá, tampoco hemos tenido miedo de apoyar o financiar la acción política por otros medios cuando ha resultado apropiado: los golpes parlamentarios en Brasil y Paraguay; o los golpes militares y otro tipo de intervenciones en Venezuela, Honduras y Haití. También hemos recurrido a nuestro poder financiero. Y gastamos decenas de millones de dólares anualmente a través de nuestro Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia para apoyar organizaciones políticas pro EEUU. (Podría explicarle otras cosas que hemos hecho en un informe confidencial.) Sin embargo, estos no pueden ser nuestros principales mecanismos de influencia en los aspectos políticos de la región. La diplomacia, incluyendo la diplomacia pública, debe de ser siempre el primer recurso.

Pudiera parecer que con los gobiernos de los países más grandes de nuestro lado y el liderazgo de instituciones multilaterales (incluyendo OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso en la actualidad el Mercosur) tan claramente en nuestras manos y en las de nuestros aliados, conseguiríamos cualquier objetivo que nos propusiéramos

alcanzar. Pero, como nos ha demostrado la aplastante victoria de AMLO, la izquierda latinoamericana dista mucho de estar muerta. Incluso en aquellos países en los que han perdido la presidencia en los últimos años, siguen contando con una gran proporción del voto, mucho más alta de la que alcanzaran en el siglo XX. Esto en parte obedece a que, salvo contadas excepciones, no les fue mal a sus votantes mientras estuvieron esas fuerzas en el poder: la pobreza en la región cayó de un 44 a un 28% desde 2002 hasta 2013, tras una tendencia ascendente en los 20 años anteriores.

No sabemos cuándo llegara la siguiente recesión o crisis económica ni qué impacto tendrá en la región. El Gobierno de Macri en Argentina ya se enfrenta a profundos problemas económicos, y la popularidad del presidente ha caído de un 50 a un 30% en pocos meses. El Gobierno brasileño es profundamente impopular y se enfrenta a huelgas, cifras de desempleo de dos dígitos y un lentísimo crecimiento económico. En el horizonte acechan nubes de tormenta en la medida en que persiste el ciclo de austeridad en la Reserva Federal de EEUU y aumenta la probabilidad de que “se frenen en seco” los flujos de capital en la región, con la consiguiente probabilidad de que se originen crisis y recesiones.

La paciencia diplomática, el ejercicio blando del poder y el cultivo de alianzas fueron nuestras armas más poderosas para reducir la “marea rosa” que se había tragado a buena parte de América Latina durante la primera década del siglo XXI. Sinceramente, espero que puedan conservar y construir sobre nuestros logros.

(Fuente: Mark Weisbrot. The Real News Network / Ctx)

ARGENTINA

EL FRACASO DE MACRI Y SU LABORATORIO NEOLIBERAL EN ARGENTINA

La crisis económica argentina se aceleró en las últimas semanas y llevó a la Alianza Cambiemos a su situación más complicada desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2015. Tanto por la presión de los capitales internacionales —a través de la fuga masiva de divisas que provocó una devaluación del peso— como por una sociedad con un importante nivel de organización y movilización.

El alza del dólar, que llegó a superar los 40 pesos la última semana —provocando una devaluación de más del 100% en lo que va del año— obligó al Ejecutivo liderado por Mauricio Macri a tomar medidas drásticas. Enmarcado en su plan neoliberal, la resolución fue apostar por mayores medidas de ajuste, algunas inéditas en la historia democrática del país.

Entre estas últimas se destaca la degradación del Ministerio de Salud al estatus de Secretaría dependiente de la cartera de Desarrollo Social. Lo mismo sucedió con el Ministerio de Trabajo, que ahora quedará bajo la órbita de Producción, retrocediendo así 70 años de historia.

A su vez, esto se enmarca en una apuesta por reducir el déficit fiscal que busca ser llevado a cero para 2019. Una medida que tiene un antecedente poco feliz para la sociedad argentina: fue anunciada como la salvación por el Gobierno de Fernando de la Rúa meses antes de que estallara la crisis más grande de la historia del país sudamericano en diciembre de 2001.

Para esto se reducirá aún más el gasto público eliminando los subsidios a empresas privadas de servicios lo cual, se espera, repercuta en más aumentos de tarifas y más inflación (originalmente prevista por el Gobierno en un 15% anual y que ya se pronostica por encima del 35%).

A comienzos de 2018, los mismos mecanismos que permitieron la entrada de divisas para la especulación financiera, garantizaron su rápida salida cuando el alza de la tasa de interés en EE UU golpeó todas las economías del mundo

También continuarán los despidos de trabajadores de la Administración Pública como viene sucediendo de manera sostenida, pero esta tendencia ahora se verá agudizada por la eliminación de Ministerios enteros y sus consecuentes programas. Se une el recorte del presupuesto para la Educación y la Ciencia, lo que ha desatado un extenso conflicto en las Universidades Nacionales que se encuentran hace un mes en huelga.

Todo esto hará aumentar la desocupación y la pobreza, tal como reconoció el propio presidente durante un discurso al país emitido el lunes.

Las razones de la crisis

Desde su llegada a la presidencia, Macri desarrolló una política económica con lineamientos netamente neoliberales que, combinada con problemas estructurales, dejaron la Argentina en una situación muy frágil ante cualquier embate del mercado mundial.

Entre las primeras medidas estuvo bajar y, en algunos casos directamente eliminar, el impuesto a las exportaciones de la producción agropecuaria y minera. De esta forma se anuló una de las principales fuentes de divisas. A su vez se permitió la libre remisión de dinero de las empresas a las casas matrices (previamente, las multinacionales estaban obligadas a tenerlo un año en el país).

Además se implementaron enormes aumentos de tarifas de servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte, combustibles) que impactaron en el bolsillo de la población y redujeron el consumo. Generando así una caída de la actividad económica.

Estas decisiones fueron acompañadas de una desregulación total del mercado financiero y una tasa de interés alta que permitió a capitales especulativos hacer negocios con las llamadas Letras del Banco Central (Lebacs), generando un importante ingreso de dólares durante los primeros dos años de gestión pero no para inversión en industrias ni para generar puestos de trabajo.

A comienzos de 2018, los mismos mecanismos que permitieron la entrada de divisas para la especulación financiera, garantizaron su rápida salida cuando el alza de la tasa de interés en EE UU golpeó todas las economías del mundo. A una primera crisis cambiaria en mayo le siguió una más reciente en agosto.

El acuerdo con el FMI por 50.000 millones de dólares convirtió a la Argentina en el país más endeudado con el ente financiero a nivel mundial

Durante este proceso la administración Macri elevó la tasa de interés de referencia primero al 40% y luego al 60% (guarismos únicos en el mundo), haciendo imposible cualquier tipo de financiamiento o crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que son las principales creadoras de puestos de trabajo.

El combo llevó a una economía estructuralmente dependiente —cuyo principal ingreso de divisas proviene de la exportación de materias primas— a sufrir los embates de la falta de dólares y ponerla al borde de una crisis.

Fue entonces que Macri solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo por 50.000 millones de dólares convirtió a la Argentina en el país más endeudado con el ente financiero a nivel mundial y profundizó su dependencia ya que debió adaptarse a los objetivos impuestos por el organismo presidido por Christine Lagarde.

Paradójicamente no pudo cumplir ni siquiera con esas medidas y debió llevar a cabo recientemente lo que fue calificado por diversos analistas como un “ajuste del ajuste”.

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y Mauricio Macri en un encuentro del G20 en Argentina en 2018.

Las primeras chispas de un pueblo organizado y expectante

Tras los anuncios de esta semana, se dieron episodios aislados que recuerdan a la anterior crisis: hubo cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires y saqueos de comercios en algunos puntos del país. El más trágico fue el que sucedió en la localidad de Saénz Peña, en la provincia de Chaco (noreste), donde un joven de 13 años murió de un disparo en el pecho en el marco de la represión policial.

Sin embargo, una de las principales diferencias con la crisis de 2001 y que permiten suponer que el desenlace no será igual, es el nivel de organización que tiene la sociedad argentina y su entramado de contención. Hay dos grandes movimientos que se destacan por su dinamismo y presencia callejera: el feminismo y la economía popular.

El primero, conformado al calor de décadas de organización paciente de las mujeres argentinas, cobró masividad a partir de 2015 en el marco de las movilizaciones de #NiUnaMenos contra los feminicidios y este año marcó un hito al lograr que el debate del aborto llegara al Congreso. A pesar de que el Senado rechazó el proyecto, eso no quitó que la discusión generara una transformación cultural que tuvo su corolario en la marcha de dos millones de mujeres el 8 de agosto.

A su vez, fue este movimiento el primero en realizar un paro nacional al gobierno de Macri en octubre de 2016 cuando la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) se mostraba, como ahora, dubitativa.

Por su parte, el movimiento de la Economía Popular representa a los sectores desclasados que no lograron ser integrados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de personas que se crearon su propio trabajo y se nuclean centralmente en cooperativas hoy organizadas en torno a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otras organizaciones similares.

Este movimiento consiguió importantes triunfos, incluso legislativos, como la Ley de Emergencia Social, y ha sido uno de los que pudo arrancarle más recursos al Gobierno por su fuerte inserción en los barrios populares, principalmente de los grandes centros urbanos y sus periferias.

Un actor más a considerar son los sindicatos que, aunque con poca reacción en general —salvo excepciones—, siguen siendo organizaciones con un importante poder de presión y capacidad de paralizar el país. A pesar de su posición históricamente

negociadora, han sido obligados a desplazarse cada vez más hacia la oposición ante la imposibilidad de acordar condiciones aceptables para sus bases.

Todas estas expresiones, todavía con demandas parciales y desarticuladas, han tenido sin embargo un enfrentamiento frontal con el modelo neoliberal, ya sea por orientación política (como en el caso del feminismo) como por reivindicaciones concretas (como en la economía popular y el sindicalismo tradicional).

Finalmente, se complementan con una oposición política que también se encuentra dispersa pero que tiene en el kirchnerismo —con la figura de la senadora y expresidenta Cristina F. Kirchner a la cabeza— y las distintas expresiones de la izquierda, a dos actores que también han mantenido su carácter confrontativo y sin vacilaciones con el Gobierno.

¿Un nuevo 2001?

Si bien las medidas económicas y algunas de sus consecuencias son muy similares a las de la última gran crisis del país, las bases sobre las que se asientan son diferentes. La Argentina de hoy no tiene más de un 20% de desocupación ni la mitad de la población vive en la pobreza y su PBI es un 150% más grande que en aquel entonces.

Además, durante los gobiernos anteriores se gestó una red de asistencia social que, aunque hoy deteriorada, sigue haciendo de barrera de contención: jubilaciones, asignación universal por hijo, programas laborales en los barrios, etc. permiten a gran parte de la población tener aunque sea un mínimo ingreso económico.

Estas condiciones generales se complementan con los actores políticos y sociales mencionados anteriormente que canalizan y organizan la bronca popular. De esta forma, es probable que la espontaneidad callejera que se vio durante la rebelión de 2001 hoy no se manifieste de la misma forma ya que posee otros marcos organizativos e institucionales sobre los cuales sostenerse y expresarse.

Dependerá en gran parte de los movimientos del propio Gobierno en las próximas semanas cuál sea el desenlace. Si logra llegar a las elecciones de octubre de 2019 a fuerza de ajuste y represión o debe optar por una salida anticipada ante la imposibilidad de sortear la crisis.

En cualquier caso, el modelo neoliberal está golpeado y quien venga después de Macri —sea del signo político que sea— deberá resolver si elige seguir los dictados del FMI y el capital transnacional o apoyarse en un pueblo que empieza a decir basta y está dispuesto a salir a la calle.

(Fuente: Santiago Mayor. El Salto)

BOLIVIA

LA ESTABILIDAD BOLIVIANA, RESISTENCIA FRENTE A LA TEMPESTAD GEOPOLÍTICA

El 8 de agosto del 2017, el presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera completaron 11 años al frente del gobierno boliviano, liderando uno de los procesos más sólidos de transformación social, económica, política y cultural en toda la región. Un proceso cuyos hitos fundacionales están centrados en las luchas sociales de indígenas y campesinos, y en sus desarrollos de gobierno en una gran movilización social por las transformaciones culturales y los cambios en la estructura económica, que sin ninguna duda han ampliado y profundizado la democracia.

El gran esfuerzo político por la nacionalización de los recursos naturales bolivianos, cambió las condiciones de híper explotación que existían hasta 2005, bajo las condiciones de tutelaje semicolonial de los Estados Unidos. Resulta importante recordar que el gas y el petróleo boliviano eran extraídos por las transnacionales con la fórmula 80% de ganancias para las empresas y 20% para el Estado nacional. Con la nacionalización esa fórmula se invirtió: el 80% de las ganancias fueron para la construcción de un Estado inclusivo y con el objetivo de justicia social, el 20% para las transnacionales -quienes se quejaron y resistieron pero continuaron extrayendo después de los cambios- confirmando la existencia de grandes márgenes de ganancia en el negocio y la justeza de la medida soberana.

En buena medida es debido a ello que Bolivia se mantiene en unas condiciones de 'buen vivir' muy superiores a la realidad existente antes del primer mandato de gobierno del Movimiento al Socialismo-MAS. En medio de la actual desaceleración económica mundial -que algunos teóricos asumen como recesión- Sudamérica -dependiente y centrada en la economía primaria- sufre los efectos negativos en las finanzas nacionales y en la política fiscal por la caída de los precios mundiales de las materias primas, la enconada ofensiva conservadora para revertir los cambios industrializadores, de distribución del ingreso y por imponer de vuelta las medidas neoliberales en toda la región; un contexto recesivo en el que Bolivia sale airoso sin procesos inflacionarios ni atisbos de escasez o dificultades de acceso a alimentos o productos básicos, vinculados al autoabastecimiento soberano de alimentos y de ordenamiento de las cadenas productivas.

Combinando una economía exportadora de productos primarios y de generación de empresas agroalimentarias nacionales se logró entre 2010 y 2017 duplicar el PIB del país (crecimientos de más del 4% anual), según lo constata el Banco Mundial, con su efecto virtuoso sobre otros sectores de la economía interna. Un proyecto económico que espera ampliarse en el 2018 con la relación político comercial fortalecida el 15 de agosto en la reunión del canciller boliviano Fernando Huanacuni y su homólogo de China: Wang Yi, en la que hablaron de la visita de Evo Morales al gigante asiático y anunciaron el ingreso del país andino como miembro activo del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura.

Bolivia busca mayor estabilidad económica y política, pues sabe que no está exenta de provocaciones o ataques foráneos, en especial, por la sostenida estrategia de asedio sobre Venezuela -uno de sus principales socios políticos en la región-. Los planes de desestabilización de las derechas locales y de los EEUU contemplan avanzar sobre Bolivia: el 14 de agosto Peter Brennan -encargado de negocios estadounidense en Bolivia- profirió una amenaza que lo comprueba. El diplomático declaró que "ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que se encuentra Venezuela",

afirmación que puede entenderse como una confesión de parte -por el papel de EEUU en lo que ocurre en Venezuela- y una velada amenaza, al tiempo que reafirma la intención de buscar quiebres y contradicciones en los sectores que siguen apoyando el proceso de cambio en el país andino para retomar la agenda destituyente desatada desde el comienzo del mandato de Morales.

Estas amenazas están relacionadas también con el papel de Bolivia en la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos-OEA, donde el embajador Diego Pary ha representado una posición soberana e independiente a la actuación del uruguayo Luis Almagro, secretario de la entidad, que viene operando con todas sus fuerzas para el derrocamiento del presidente Maduro de Venezuela. La estabilidad económica viene siendo entonces amenazada por la turbulencia de la geopolítica regional.

Bolivia retoma agenda de infraestructura

En el contexto de ese escenario político y económico, el 13 de agosto se promulgó la Ley 969 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) que levanta la intangibilidad de ese territorio, generando un debate político de trascendencia entre el gobierno y la oposición boliviana. Una ley que permitirá al Estado la construcción de una carretera que comunicará al departamento de Beni (frontera con Brasil) con el departamento de Cochabamba, atravesando el TIPNIS sin pasar por el departamento de Santa Cruz.

En el 2012 la construcción de la carretera había sido sometida a “Consulta Previa, Libre e Informada” con las comunidades, cuyos resultados fueron positivos para la iniciativa del gobierno -por cuanto fue rechazada la intangibilidad del territorio- y se aceptó la construcción de la carretera. El gobierno tomó la decisión de suspender las obras después de la consulta, producto de la presión mediática, aunque 58 de las 69 comunidades que participaron en la consulta aceptaron la construcción de la carretera y 57 rechazaron que el TIPNIS continúe siendo un territorio intangible.

El presidente Evo Morales explicó que la construcción de la carretera por TIPNIS es factible, primero porque ya existe un camino en la zona y segundo -dado que el territorio que rodea al TIPNIS es muy hostil a la construcción de una carretera- atravesará 60 km aproximadamente de selva virgen. Este asunto ya desató la polémica entre ambientalistas, ONGs financiadas por gobiernos contrarios al de Evo Morales y por la propia iglesia católica (pieza fundamental en la colonización española) que a través de la conferencia episcopal declaró: “que el levantamiento de la intangibilidad le apuesta a la colonización”.

Esta polémica ha sido utilizada por la oposición política en pleno escenario preelectoral. La misma rechazó la promulgación de la ley y las acusaciones gubernamentales que develan intereses económicos de los cruceños en el TIPNIS, asegurando que el interés es tan sólo ambiental. Norman Lazarte, diputado de Tarija por el partido Unidad Demócrata, demandó la inconstitucionalidad de la Ley 969 del TIPNIS, porque considera que vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de protección del medio ambiente. Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia, afirmó que no están en contra de la construcción de una carretera que comunique a Beni, pero que se debería respetar el territorio del TIPNIS por razones ecológicas y pide coherencia política al gobierno. Samuel Doria Medina también se manifestó en contra y solicita se realice un referéndum. Cides-UMSA (centro de investigación) también rechaza la carretera y se desafiliará del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO porque tiene afinidad con el Gobierno de Evo Morales y “con su modelo político arbitrario que, a

nombre de la falacia desarrollista, arremete contra los pueblos indígenas, fractura su liderazgo y divide sus organizaciones”, agrega el documento”.

Como muestra del respaldo, la nueva ley fue promulgada por el presidente Evo Morales ante importantes sectores del departamento de Beni en cabeza del Gobernador –Carmelo Lenz-, el Alcalde de San Borja Jorge Añez, habitantes de la región, ganaderos, transportistas, comerciantes y representantes de las comunidades: Oromomo, La Asunta, San Pablo del Isiboro, Santísima Trinidad, Puerto San Lorenzo, San Miguelito, Limo del Isiboro y de los Tsimanes.

La retoma de la agenda gubernamental de la construcción de la carretera es una fuerte apuesta del gobierno, La cual se relaciona con las necesidades de ampliar las actividades económicas productivas de la zona (castaña, ganadería, arroz, yuca, etc.) además de conseguir conectar al departamento de Beni hacia el centro del país. Para el gobierno la consulta previa es una muestra del consenso con lo originarios de la región que apoyan la construcción de la carretera y rechazan la intangibilidad, aunque dirigencias de algunas comunidades están divididas, como la Subcentral del TIPNIS, cuyo presidente Fabián Gil rechaza la construcción de la carretera.

Los que apoyan la ley que revierte la intangibilidad -y el propio gobierno- presumen que las fuerzas opositoras a la construcción de la carretera provienen de la elites de Santa Cruz por intereses económicos y no por razones ecologistas, porque la carretera permitirá que Beni se comunique con el país sin pasar por Santa Cruz. De cierta manera el debate sobre la carretera del TIPNIS levanta la discusión sobre el papel de la burguesía cruceña en la rebelión contra el MAS (de la media luna opositora en el 2009) y supone una disputa de fondo sobre la concepción de desarrollo no sólo del gobierno, sino de los sectores de poder que tuvieron el gobierno durante siglos y dejaron postradas las demandas de los pobladores de extensas regiones del país, mientras concentraron riquezas en algunas regiones.

El gobierno tiene el desafío de demostrar en la práctica las falacias de los argumentos en contra de la carretera que pueden resumirse en que las poblaciones -aunque la consulta previa dijo lo contrario- no quieren el proyecto de construcción de la vía por el costo ambiental, que la carretera facilitará el acceso a los cocaleros hacia la zona del Beni y que la vía se puede construir sin afectar al TIPNIS. Argumentos que no son contundentes y son expresados por sectores de poder con innegables intereses económicos y políticos sobre la región.

Una coyuntura boliviana que pone a prueba el apoyo al gobierno, que aún mantiene el 42% de apoyo a su gestión, según lo indica una encuesta de la empresa Ipsos publicada el 18 de agosto. Los buenos números de la economía nacional que generan estabilidad se ponen a prueba con las acciones de alto impacto como las de la carretera del TIPNIS -realizadas en medio de la dura ofensiva de los Estados Unidos- que anuncia tempestades para el pueblo de Tupac Katari.

(Fuente: Shirley Ampuero y Javier Calderón. CELAG)

COLOMBIA

SEGÚN LA FISCALÍA, SE REGISTRARON 32 MIL HOMICIDIOS EN TRES AÑOS

La vicefiscal María Paulina Riveros entregó cifras alarmantes sobre el número de asesinatos que se han presentado en el país desde el 2015 y contó que se están investigando todos estos hechos.

“32 mil homicidios ocurridos durante los tres últimos años y esta cifra resulta alarmante, no es posible que en un país donde estamos defendiendo los derechos humanos ocurran 32 mil homicidios dolosos”, dijo Riveros.

La vicefiscal quiso demostrar con estas cifras que el nivel de violencia en el país es demasiado alto y sus declaraciones se hicieron en medio de un debate de control político que se hizo al Gobierno sobre el asesinato de los líderes sociales. Justamente la funcionaria indicó que la Fiscalía tiene la obligación de aproximarse a los territorios para garantizar la institucionalidad en los lugares en donde se están presentando estos asesinatos.

A su turno la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que la protección de líderes sociales será una de las prioridades del presidente Iván Duque durante su mandato.

Entre tanto el ministro de defensa Guillermo Botero dijo durante el debate que el ejecutivo está adelantando distintas operaciones para luchar contra el narcotráfico y los grupos de delincuencia que tienen influencia directa en el asesinato de los líderes.

El debate fue organizado por las bancadas de oposición y se buscaba conocer las políticas con las que se continuará protegiendo a estas personas.

(Fuente: NODAL)

EL SALVADOR

LA PUGNA EE.UU.-CHINA LLEGA A EL SALVADOR

El 23 de agosto la Casa Blanca emitió un comunicado anunciando que reevaluaría su relación con El Salvador. El anuncio se debe a la decisión del Gobierno del país centroamericano de poner fin a sus tradicionales relaciones diplomáticas con Taiwán e iniciarlas con la República Popular de China. Para el Gobierno estadounidense esta decisión se ha tomado de “manera no transparente” y afecta al “bienestar de la economía y seguridad de toda la región de las Américas”.

La decisión del Gobierno salvadoreño, presidido por Salvador Sánchez Cerén, se suma a lo hecho antes por otros países latinoamericanos, como Costa Rica, República Dominicana o Panamá. Estos países, que tradicionalmente habían reconocido a Taiwán -una herencia de la Guerra Fría- decidieron comenzar relaciones diplomáticas con Beijing para abrir sus mercados a la inversión china. Sin embargo, entonces no hubo una reacción similar por parte del Gobierno estadounidense que, a raíz del caso salvadoreño, ha llegado a tildar a China de “desestabilizar” e “interferir políticamente” en la política continental. ¿Cómo interpretar esta reacción?

EE.UU. y El Salvador

Desde el año 2006, Estados Unidos (EE.UU.) y El Salvador están vinculados comercialmente a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), posteriormente ampliado a República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). En marzo de 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado por ex miembros de la guerrilla, gana las elecciones salvadoreñas y pronto se empieza a especular sobre las nuevas alianzas internacionales que tendrá el nuevo Gobierno de izquierdas, en un contexto en que la región se dividía entre los países del bloque bolivariano y los países opuestos al bloque bolivariano.

El Gobierno de Mauricio Funes rehuyó su apoyo explícito a uno de los bloques. En 2011 firmó con el Gobierno de Barack Obama el Partnership for Growth (PFG), un nuevo modelo de cooperación para el desarrollo que estaba enfocado a mejorar la economía salvadoreña y el clima de inversión. Un año después, el Gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Nacional un paquete legislativo para promover la inversión y facilitar el comercio que incluía, entre otras, una Ley de Zonas Francas.

No obstante, los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió El Salvador decayeron entre 2012 y 2013 un 71% debido, según EE.UU., a aspectos como “la incertidumbre política, regulaciones comerciales inconsistentes y gravosas, un sistema judicial a veces ineficaz y crimen violento generalizado”. Este clima adverso no fue inconveniente para que la posición de inversión directa estadounidense en El Salvador creciera entre 2016 y 2017 un 9.5%, según datos de la Oficina de Análisis Económico de los EE.UU. Por su parte, las filiales de las multinacionales estadounidenses con participación mayoritaria en El Salvador emplearon a 34.900 personas en 2016, un 0.3% menos que en 2015. Sus ventas fueron de 3.800 millones de dólares.

EE.UU. es, en la actualidad, el principal socio comercial de El Salvador. A ese país fueron el 42.6% de las exportaciones salvadoreñas entre enero y mayo de 2018. Y de EE.UU. procedía el 32.8% de las importaciones salvadoreñas en el mismo periodo. En segundo lugar, con el 12.6% de las importaciones, se encuentra un país con el que El Salvador no tiene, a diferencia de EE.UU., ningún acuerdo comercial todavía, la República Popular de China. Con el inicio formal de las relaciones diplomáticas El Salvador-China es de prever que los acuerdos comerciales también lleguen y el flujo de intercambio entre ambos países aumente, en detrimento del comercio con EE.UU. o con terceros países.

El Salvador busca su desarrollo

Este viraje en la política exterior de El Salvador puede entenderse si se observa cómo, en los últimos años, los gobiernos salvadoreños han apostado por la atracción de inversión extranjera para el desarrollo económico del país. Una de las ideas ha consistido en proponer la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE), en las que las empresas se insertan beneficiándose de un régimen fiscal ad hoc y otra serie de privilegios. Esta fue una iniciativa propuesta en 2014 por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pero retomada por el Gobierno de Sánchez Cerén. Éste ha presentado una controvertida Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental que está generando debate entre los sectores de la izquierda por el carácter neoliberal de la propuesta y sus eventuales impactos medioambientales.

La búsqueda del desarrollo se ha hecho también de manera multilateral, como la firma en 2017 de un Plan para el Desarrollo del Golfo de Fonseca entre los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En la declaración conjunta estos países solicitaban, entre otros, al Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ayuda para el financiamiento de proyectos de desarrollo e inversión en la zona. Cabe recordar que el BID es uno de los

entes financiadores de la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte –promovida por el gobierno de Barack Obama en 2015– de la que El Salvador forma parte, junto con Guatemala y Honduras. A través de ella, El Salvador recibió 130 millones de dólares en 2017. La Alianza para la Prosperidad ha propiciado la creación de estas ZEE.

El capital chino, no obstante, aparece como uno de los principales socios para dinamizar las ZEE. China ha expresado su interés en obtener la concesión del Puerto de la Unión Centroamericana, inaugurado hace años, pero todavía sin explotar. EE.UU. está preocupado por esta posible inversión en El Salvador. Lo expresó por vía de su embajadora en el país, Jean Manes, quien declaró en julio pasado que era “alarmante” la estrategia de “expansión económica y militar” de China en la región y denunció el interés de China por el Puerto de Cutuco o Puerto de la Unión. La idea de la militarización no es nueva sino una acusación reiterada por parte de las autoridades estadounidenses.

En realidad, EE.UU. tiene miedo a que China pueda usar los puertos salvadoreños para afianzar su posición en la ruta comercial hacia el Pacífico, lo que podría agravarse si finalmente se concretara el canal interoceánico en Nicaragua y si el Puerto de la Unión se usa como respaldo a éste, siguiendo sus orígenes como puerto alternativo para los buques post Panamax. Por tanto, es una preocupación por la posible pérdida de control geopolítico sobre un país cuyas élites han sido tradicionalmente aliadas y que puede tener repercusiones en el comercio global. La creciente expansión china por Centroamérica -y América Latina y el Caribe en general- está siendo presentada cada vez más por EE.UU. como una amenaza a sus intereses y seguridad, después de años de tolerancia tácita. La línea dura hacia China del secretario de Estado, Mike Pompeo, puede estar detrás de la creciente conflictividad entre EE.UU. y China.

Reflexiones finales

La decisión del Gobierno salvadoreño llega en un momento en que EE.UU. y China se encuentran inmersos en una guerra comercial conocida como “guerra de los aranceles”, que está escalando la tensión entre ambos países. Pero también está generando fricciones entre sectores del establishment estadounidense que no comparten las decisiones de su propia Presidencia.

Cómo evolucionará la relación EE.UU.-El Salvador es difícil de prever en este contexto, pues el país centroamericano está a cinco meses de unas elecciones presidenciales que pueden traer cambios importantes, al menos en el sistema de partidos. Y EE.UU. está sumido, a su vez, en una inestabilidad considerable debido a los cuestionamientos crecientes al presidente Donald Trump, provenientes de su propio entorno. A pesar de esta volatilidad actual, lo que parece que no va a cambiar es la necesidad de las élites salvadoreñas de atraer inversión, sea estadounidense o china. Y tampoco se esperan cambios en la voluntad de las empresas estadounidenses o chinas de continuar su expansión en El Salvador. La incertidumbre, por tanto, radica en cómo se resolverá este choque de intereses contrapuestos.

Sin duda, hay que leer la disputa chino-estadounidense en El Salvador como una expresión más de una disputa geopolítica más amplia, que no sólo lo es por los recursos y la influencia sobre América Latina y el Caribe, sino sobre quién detendrá la hegemonía geoeconómica y geopolítica de las décadas por venir. Los análisis que apuntan a un desplazamiento del centro neurálgico de la economía mundial hacia Asia son cada vez mayores. Esto implicaría que el papel central de EE.UU. como motor económico mundial y súper potencia hegemónica llegaría a su fin, no sin resistencia. El caso de El Salvador ejemplifica cómo EE.UU. no está dispuesto a perder piezas de

su tablero mundial. Ganar todas las batallas, por pequeñas que sean, es el paso para poder ganar la guerra.

(Fuente: Arantxa Tirado. CELAG)

GUATEMALA

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE SOLIDARIDAD.

La decisión del gobierno de Guatemala, la NO renovación del mandato de -CICIG- únicamente la entenderán los corruptos, mafiosos y delincuentes, como los políticos sinvergüenzas que han hundido a nuestra población en la pobreza y miseria, por sus decisiones y acciones que han implementado a lo largo de muchísimos años. Mientras que los guatemaltecos honrados nunca entenderemos las razones del por qué este gobierno tiene tanto coraje en contra de una entidad internacional como la(CICIG) que con su trabajo ha contribuido a dismantelar los mafiosos y corruptos enquistado en el Estado de Guatemala desde hace muchísimos años.

El Presidente Jimmy Morales, en todo momento que se ha referido a la CICIG nunca ha dado explicaciones claras y contundentes sobre cuáles son las leyes y en qué momento fueron violadas las normas y las supuestas violaciones a los derechos humanos.

Analizando el alcance y la connotación de la decisión tomada el día de hoy por el gobierno de Guatemala, podríamos decir que conlleva dos situaciones contrarias:

1) Por un lado, su argumento ha sido que las actuaciones de la CICIG se han enmarcado en violaciones a las normas internas de nuestro país, e induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. La“intromisión” en los quehaceres del Estado de Guatemala. Afirmando actuación irresponsable de la Comisión.

2) Pero por el otro lado, como parte de la decisión aduce que ya es tiempo que la CICIG se retire de Guatemala y por consiguiente se hace necesario desde ya transferir las capacidades de la CICIG a las instituciones Guatemaltecas.

Lo anterior implica posibles consecuencias políticas y legales para Guatemala de esta nueva decisión tomada por el gobierno de Guatemala. Si en verdad la CICIG ha estado actuando al margen de su mandato y de las normas internas de nuestro país, entonces el mismo gobierno con su decisión tomada el día de hoy estaría avalando las actuaciones “ilegales” desde ahora hasta la finalización del mandato de la CICIG (septiembre 2019). En tanto si el propósito de la decisión es la transferencia de las capacidades a las entidades del Estado, NO cabría o no tendría sentido el argumento anterior.

Estamos a las puertas de un retroceso al combate a la corrupción y un retroceso serio en la función del sistema de justicia en Guatemala. La decisión del gobierno de descalificar públicamente el trabajo de la CICIG, automáticamente descalificó todo el apoyo de la comunidad internacional hacia dicha entidad (CICIG)

¡¡¡PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO DE QUIENES? DE LA POBLACIÓN HONRADA O DE LOS CORRUPTOS!!!

(Fuente: Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala. -CONDEG-)

HAITI

TE OCUPO, TE VIGILO, TE ENDEUDO, TE MATO

El poeta haitiano René Depestre escribió en “El neumático incendiado” que su país es “el primer productor mundial de desdichas y de zombis”. A este trágico ranking, ahora hay que sumarle las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que han desatado la rebelión popular.

El primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, tuvo que dimitir luego de las masivas protestas ante el anuncio de un alza en el precio de los combustibles de hasta un 50 por ciento, como parte de un acuerdo con el FMI que pretendía que el país caribeño implementara un plan de reformas que incluyera una reducción de los subsidios. El enojo ciudadano obligó al Gobierno a paralizar la medida.

En el país más empobrecido de América, más de la mitad de sus 11 millones de habitantes vive con menos de 2 dólares al día y utiliza el querosén en sus hogares. El inminente aumento de este producto esencial para los sectores más desfavorecidos del país desató protestas callejeras de magnitud con un saldo de al menos tres personas muertas.

El recuento de daños perpetrados por el FMI en el mundo no detiene al organismo de la usura internacional para continuar con sus anquilosadas recetas cuyas consecuencias siempre recaen sobre los pueblos. No es la primera vez que el Fondo Monetario posa sus garras sobre Haití, que pasó de ser uno de los principales productores de arroz del mundo a tener que importarlo de los Estados Unidos. Hace más de dos décadas le impuso un “ajuste estructural” a la isla y la obligó a realizar una apertura indiscriminada de su economía. Por eso, hoy más del 80 por ciento del grano proviene de Miami.

Así lo explica la escritora y periodista estadounidense Amy Goodman: “Los agricultores, imposibilitados de competir con esos precios, dejaron de cultivar arroz y se mudaron a las ciudades para ganar salarios bajos, si tenían suerte de conseguir uno de los pocos trabajos disponibles en la maquila. Los pobladores de las zonas montañosas se vieron forzados a deforestar los cerros y convertir la madera en carbón vendible. Esto generó una crisis ecológica que desestabilizó las laderas de los cerros, y que, a su vez, aumentó la destructividad de los terremotos y provocó deslizamientos de tierra durante la estación lluviosa”.

El profesor de Economía de la Facultad de Ciencias de Puerto Príncipe, Camille Chalmers, da detalles del plan de ajuste perpetrado en la década del 90: “Un plan clásico del FMI que tuvo como resultado la destrucción del campesinado. En 1972 éramos autosuficientes; hoy importamos el 82 por ciento de los productos que consumimos. Se perdieron 800.000 empleos en menos de 10 años en un país que tiene una tasa de desempleo que supera el 70 por ciento y un ingreso promedio de dos dólares por día por habitante”.

Además de la ocupación económica de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI, Haití ha padecido siete intervenciones militares en el último cuarto de siglo. La última Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) se extendió de 2004 a 2017, fue ordenada por el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luego de la intromisión militar conjunta de los Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile tras el golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide.

Los nobles objetivos de los cascos azules eran “estabilizar al país; pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales; promover elecciones libres e informadas y fomentar el desarrollo institucional y económico”. Sin embargo, organizaciones sociales de Haití y América Latina denunciaron que estas intenciones nunca se concretaron y que, además, la acción de la Minustah dejó casi 10.000 muertos por el brote de cólera y 780.000 afectados. Además, más de 2 mil víctimas por abusos sexuales y actos violentos ejercidos por esta fuerza militar extranjera.

El brote de cólera que mató a tantos haitianos fue producto de la negligencia de Naciones Unidas. De acuerdo a un cable de diciembre de 2010 de la agencia de noticias AFP: “El renombrado epidemiólogo francés Renaud Piarroux dirigió el mes pasado una investigación en Haití y llegó a la conclusión de que la epidemia fue generada por una cepa importada, y se extendió desde la base nepalí de la Minustah”. Sorprendentemente, la ONU negó esta información. El pueblo reaccionó y apedreó a las fuerzas interventoras. Hubo represión. Dos muertos.

En una reflexión publicada por aquellos días en la agencia Prensa Latina, Fidel Castro da cuenta del informe que recibió de la misión cubana en la antilla y que confirmó que “la cepa aislada corresponde a la prevaleciente en Asia y Oceanía, que es la más severa. La unidad nepalesa de los cascos azules de las Naciones Unidas está situada en las orillas del río Artibonite, que atraviesa la pequeña localidad de Meyé, donde surgió la epidemia, y Mirebalais, donde se extendió después rápidamente”.

Suena a historia antigua: cuando españoles y portugueses llegaron a este continente para explotarlo también dejaron como “obsequio” sus viruelas.

El terremoto de enero de 2010, en el que fallecieron 316 mil personas, 350 mil más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas perdieron su hogar fue otro capítulo más de “desdichas y zombis” para esta isla que dio el primer grito libertario del continente en 1804, que proclamó la primera república de negros en el mundo y que fue la primera en abolir la esclavitud.

Haití fue hostigada por Francia durante todo el siglo XIX, crispada por la pérdida de esa colonia que en aquellos tiempos producía el 75 por ciento del azúcar del mundo y luego por los Estados Unidos que tomó la posta, la copó militarmente e instaló una de las peores dictaduras de la región encabezada por François Duvalier —Papá Doc—, desde 1957 a 1971, que a su muerte fue sucedido por su hijo, Jean-Claude Duvalier —Baby Doc—, quien huyó del país en 1986.

Ambos dejaron un tendal de 60 mil haitianos asesinados a manos de las fuerzas paramilitares Ton Ton Macoutes y el saqueo de la economía del país. Parecía que con la elección en 1990 del excuro católico Jean Bertrand Aristide al final Haití tendría paz, pero unos meses después fue derrocado.

Tantas intervenciones a Haití se justificaron en la teoría de los “Estados fallidos” impuesta por el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush, para quien esos países atrofiados merecían ser ocupados para inocularles el sistema estadounidense e instalar multinacionales.

Haití tiene 1.177 kilómetros de costa marina sin control de ningún tipo. Los puertos no pertenecen al Estado, los maneja una elite que hace sus negocios privados protegida

por sus ejércitos mercenarios. O casualidad, el narcotráfico ha aumentado: el 8 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por Haití.

Un país apaleado como perro sin dios. Tragedias naturales y políticas mixturadas para dinamitar cualquier hendidura de salida. Terremotos y dictaduras. Corrupción y huracanes. Ocupaciones y epidemias.

Demasiadas presencias para tanta ausencia “de la única rebelión de esclavos que se transformó, en su momento (entre fines del siglo XVIII y principios del XIX) en una revolución integral, capaz de tomar el poder (...) y que fue no solamente la primera revolución independentista en la América del Sur del Río Grande, sino la social y políticamente más radical de todas ellas”, como señala el sociólogo argentino Eduardo Grüner en su brillante libro *La oscuridad y las luces*.

Para certificar, la Constitución Imperial de Haití (1805) que señala en su artículo 2: “la esclavitud queda abolida para siempre”; o el 3: “los ciudadanos de haitianos son hermanos unos para los otros. La igualdad a los ojos de la Ley es irrefutablemente reconocida.

No pueden existir títulos, ventajas y privilegios más que los necesariamente resultantes de la consideración y compensación por servicios rendidos por la libertad y la independencia”; o el 12: “ninguna persona blanca, de cualquier nacionalidad, pondrá pie en este territorio con el título de amo o propietario ni, en el futuro, podrá adquirir propiedad aquí”.

Y ahí, como una llaga el mensaje a los blancos por parte de Depestre: “Salgo huyendo del viejo orden gemelo bárbaro/civilizado”.

(Fuente: Mariano Vázquez. NODAL)

NICARAGUA

DEMUESTRAN QUE LA CIA ESTÁ DETRÁS DEL INTENTO DE GOLPE EN NICARAGUA USANDO A GRUPOS DE ULTRAIZQUIERDA

Una vez más la CIA, a través de pantallas como las fundaciones NED (National Endowment for Democracy) y USAID, aparece financiando a grupos radicalizados de “ultraizquierda” para derrocar a un gobierno popular como el de Daniel Ortega. El objetivo obviamente no es “ideológico” sino geopolítico y estratégico: evitar que China construya un canal interoceánico que compita con el de Panamá. El poder real, como siempre, usando a las distintas ideologías a su conveniencia y la mano de obra gratis es puesta por parte de militantes fanatizados por el adoctrinamiento político. Veamos este excelente informe del medio nicaragüense TV8.TV:

Max Blumenthal, reconocido escritor, bloguero y periodista estadounidense, publicó a través de su sitio web Grayzone Project; un amplio reportaje donde habla sobre el plan de financiamiento de NED-USAID para el golpe de estado en Nicaragua.

En el artículo que pueden leer a continuación, se hace referencia al organismo National Endowment for Democracy (NED) y su relación con el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la llamada Alianza Cívica por la Democracia.

Acá el texto íntegro:

Mientras que algunos medios de comunicación corporativos han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a Nicaragua como una corriente progresista de base, los propios estudiantes del país han dejado ver todo lo contrario.

A principios de junio, los principales activistas opositores de Nicaragua fueron a reunirse a Washington, DC, con la cabeza del grupo derechista de defensa del Estado estadounidense: Freedom House. El grupo opositor, conocido como M19, estaba allí para suplicar a Donald Trump y otros funcionarios de derecha del gobierno de los Estados Unidos que los ayudaran en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

En una gira a la capital de EE. UU., los dirigentes del M19 posaron para las fotos con algunos de los neoconservadores más notorios del Congreso de los EE. UU: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen. Los M19 también fueron guiados a las reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y la organización de poder bélico USAID. Allí, se les aseguró que contarían con el apoyo rotundo de Washington.

Un mes antes de las reuniones del M19 con legisladores ultraconservadores en Washington, una publicación financiada por el brazo de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos, National Endowment for Democracy (NED), afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por NED han pasado años y millones de dólares “sentando las bases para la insurrección” en Nicaragua.

Este artículo que se jacta abiertamente de la intromisión de los Estados Unidos se publicó en el sitio web de noticias enfocado en América Latina, Global Americans, y fue escrito por el académico estadounidense Benjamin Waddell, director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Después de la publicación de este artículo, Global Americans reemplazó el término “insurrección” con la palabra más inocua “cambio”. Sin embargo, el título original aún se puede ver en la URL del artículo.

A pesar de la alteración cosmética, el artículo de Waddell ofrece una evaluación notablemente sincera del impacto de las inversiones sostenidas de National Endowment for Democracy en la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor se hicieron eco inadvertidamente de las del presidente nicaragüense Daniel Ortega y sus partidarios, que han enmarcado las protestas como una trama cuidadosamente montada respaldada hasta los dientes por Washington.

“La prensa internacional describió la rápida escalada de disturbios civiles en Nicaragua como una explosión espontánea de descontento colectivo, desencadenada por los cambios del gobierno a su insolvente sistema de seguridad social y enraizada en más de una década de gobierno autoritario por parte de la familia Ortega-Murillo”. Waddell escribió. “Y si bien las causas subyacentes de la confusión están enraizadas en la mala administración y la corrupción del gobierno, cada vez es más claro que el apoyo de los Estados Unidos ha ayudado a desempeñar un papel en el fomento de los levantamientos actuales”.

En otro pasaje llamativo, concluyó Waddell, “la participación actual de la NED en nutrir a los grupos de la sociedad civil en Nicaragua arroja luz sobre el poder del financiamiento transnacional para influir en los resultados políticos en el siglo XXI”.

Una historia de intromisión

El NED es un agente líder del poder blando de Estados Unidos que se ha metido en asuntos de otros países desde su fundación en el apogeo de la Guerra Fría en 1983. Su primer éxito tuvo lugar en Nicaragua, donde medios anti sandinistas como el diario La Prensa a través de un recorte, PRODEMCA, que también fue financiado encubiertamente por aliados de Oliver North.

En 1990, los sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata derechista Violeta Chamorro, cuya familia era dueña de La Prensa. La victoria de Chamorro representó la culminación de casi 16 millones de dólares en subvenciones de NED a partidos políticos y medios de comunicación antisandinistas.

“Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA”, comentó Allen Weinstein, fundador de la NED, en 1991.

En los años que siguieron, la NED y sus socios han ayudado a impulsar las elecciones para los candidatos neoliberales de derecha en Rusia y Mongolia en 1996; fomentó un golpe que expulsó del poder al presidente democráticamente electo de Haití, Jean Bertrand Aristide; y dirigió a millones hacia el desmantelamiento del gobierno socialista de Venezuela, un esfuerzo continuo complementado por aplastamiento de las sanciones de Estados Unidos.

Las protestas que han estallado en Nicaragua han vuelto a enfocar la influencia del NED. Según Waddell, la NED ha gastado \$ 4,1 millones en el país desde 2014, ayudando a que 54 grupos se conviertan en actores importantes en la escena política y “sentando las bases para la insurrección”.

La red respaldada por Estados Unidos detrás de las protestas

Los disturbios que paralizaron a Nicaragua fueron provocados por el anuncio del presidente Daniel Ortega de reformas al sistema de seguridad social casi en quiebra. El Fondo Monetario Internacional y un grupo paraguas de empresas locales insistieron en cambios que elevarían la edad de jubilación y privatizaron gradualmente las clínicas de salud, amenazando algunas de las ganancias más importantes de la revolución sandinista.

Cuando Ortega respondió con una propuesta que habría exigido una mayor contribución al sistema por parte de las empresas y los jubilados, con los dueños de negocios pagando la mayor parte, un sector del público explotó con indignación. La airada reacción al plan de Ortega, reforzada con una cobertura intensiva por parte de fuentes de la oposición, se convirtió en la chispa de las protestas que incendiaron el país, literalmente, en muchos casos.

Las caras más visibles del movimiento anti Ortega no han sido los jubilados afectados por las reformas de la seguridad social, sino los estudiantes urbanos, políticamente no afiliados, que buscan una victoria total. Han forjado una alianza con los opositores a la derecha.

Mientras tanto, hombres enmascarados con morteros y armas de fuego han formado la primera línea de los bloqueos viales que ya han drenado la economía de Nicaragua de unos \$ 250 millones en ingresos. Hasta la fecha, unas 170 personas han sido asesinadas en el caos. A medida que aumenta el número de muertos en ambos lados, hablar de una nueva guerra civil parece una posibilidad más que remota.

Desde que comenzaron los disturbios, la NED tomó medidas para ocultar los nombres de los grupos que financia en Nicaragua con el argumento de que podrían enfrentar

represalias del gobierno. Pero los principales receptores de respaldo de Washington ya eran bien conocidos en el país.

Hagamos Democracia, o Let's Make Democracy, es el mayor receptor de fondos NED, cosechando más de \$ 525,000 en subvenciones desde 2014. El presidente del grupo, Luciano García, que supervisa una red de reporteros y activistas, ha declarado que Ortega ha convertido a Nicaragua en un "Estado fallido" y exigió su renuncia inmediata.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos \$ 260,000 del NED desde 2014. Las subvenciones se destinaron para apoyar el trabajo del IEEPP en la capacitación de activistas para "fomentar el debate y generar información sobre seguridad y violencia. "El financiamiento también cubrió los esfuerzos para monitorear la 'mayor presencia de Rusia y China en la región'", una prioridad obvia para Washington.

Tan pronto como se iniciaron las violentas protestas contra Ortega, el director de IEEPP, Félix Maradiaga, sacó a la luz su agenda. Ex líder global del Young World Forum educado en Yale y Harvard, fue elogiado por La Prensa por "sudar, sangrar y llorar junto a los jóvenes estudiantes que han encabezado las protestas en Nicaragua que continúan desde abril hasta finales de mayo".

Cuando La Prensa le preguntó si había alguna forma de salir de la violencia sin un cambio de régimen, Maradiaga fue franco: "No puedo imaginar una salida en este momento que no incluya una transición a la democracia sin Daniel Ortega".

"Nos hemos dado una imagen terrible"

Este junio, Maradiaga dirigió una delegación de oposición a Washington para denunciar el gobierno de Ortega ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A él se unió Anibal Toruño, director de Radio Darío, otro receptor de apoyo desde hace mucho tiempo de NED y uno de los centros clave de los medios anti Ortega en la ciudad nicaragüense de León.

Mientras Maradiaga estaba en Washington, la policía nicaragüense lo acusó de supervisar una red criminal organizada que ha asesinado a varias personas durante los violentos disturbios que se han apoderado del país. Maradiaga criticó las acusaciones como una "persecución política" y una "acusación ridícula", pero pospuso su regreso a Nicaragua. El Departamento de Estado de EE. UU. lo respaldó con una declaración de apoyo vehemente.

Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes de las protestas contra Ortega estaban en Washington para presionar al gobierno de Trump en busca de ayuda para derrocar al líder de su país.

Entre los funcionarios de EE. UU. que recibieron a los estudiantes figura el director de USAID, Mark Green. "Necesitamos apoyar a aquellos que defienden las cosas en las que debemos creer", dijo Green sobre los estudiantes, en una entrevista con McClatchy.

Además de NED, USAID ha sido el promotor más activo del cambio de régimen contra los gobiernos de orientación socialista en América Latina. En Nicaragua, el presupuesto de USAID superó los \$ 5.2 millones en 2018, con la mayoría de los fondos destinados a la capacitación de la sociedad civil y las organizaciones de medios.

El viaje de los estudiantes nicaragüenses a Washington fue financiado por Freedom House, un socio de NED financiado por el gobierno de Estados Unidos cuya agenda típicamente se alinea con el ala neoconservadora del establecimiento de la política exterior estadounidense.

Freedom House elaboró un itinerario para los estudiantes que culminó con una sesión fotográfica con algunos de los republicanos más belicosos de Washington: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-Lehtinen.

De regreso en Managua, otro prominente líder estudiantil, Harley Morales, se tambaleó con disgusto ante la aparición de sus compañeros en el Capitolio. “Fue terrible”, dijo Morales al periódico El Faro. “Ellos (Cruz, Rubio y Ros-Lehtinen) son la derecha republicana extrema. Estamos muy descontentos con este viaje; fueron pagados por los Estados Unidos y se les impuso una agenda. Nos hemos dado una imagen terrible”.

Aunque esperaba “un plan de corrección de errores”, Morales admitió que el control de poderosos intereses externos sobre los manifestantes estudiantiles era cada vez más estricto. “Todos los movimientos ahora tienen asesores”, se lamentó. “Motores y agitadores. Hijos de políticos, empresarios... Tienen una línea política muy clara”.

(Fuente: KONTRA INFO)

ACTORES EN EL CONFLICTO NICARAGÜENSE

Para asomarse al drama que vive Nicaragua es necesaria una actitud de sensibilidad, compasión y solidaridad con un pueblo que ha sufrido y sufre la injusticia y la violencia y que ha sido testigo de agresiones externas y frustraciones profundas.

El conflicto en Nicaragua es complejo. Son más de 350 muertos de ambas partes, la mayoría gente joven. En esta contienda percibo cuatro actores fundamentales:

En primer lugar, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su mujer Rosario Murillo, que han hecho de su mandato una dictadura familiar, traicionando los genuinos valores de la revolución sandinista. Ha concentrado el poder sobre el legislativo, el judicial y el electoral. La mayoría de los medios de comunicación están bajo el control de la familia Ortega-Murillo. Hay casos de manifiesta corrupción. Han hecho pactos sucios con sectores de la burguesía en función de sus intereses. Pretendieron realizar el Canal Interoceánico desoyendo el clamor de las poblaciones afectadas y de los movimientos ecologistas. Por primera vez, desde el triunfo de la revolución sandinista en 1979, las fuerzas armadas reprimen violentamente a su pueblo. El discurso de Ortega es confrontativo, no favorece el dialogo. Es verdad que su gobierno ha realizado considerables obras sociales de carácter asistencial en favor de los más empobrecidos, sobre todo de los campesinos, pero no con programas de transformación social y económica, por lo que se percibe un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios.

Otro actor es el movimiento juvenil y popular. Hay una rebelión sobre todo de los jóvenes universitarios contra la concentración de poder de Ortega y sus políticas autoritarias y represivas. Su grito es libertad y democracia real. A la juventud la siguió muchísima gente desde Managua hasta la mayoría de las ciudades del país, sobresaliendo la resistencia de Masaya. Mucha de esta gente es sandinista o simpatiza con los nobles valores e ideales de la revolución sandinista, que considera

fueron traicionados por el gobierno. Por eso, exigen con vehemencia la renuncia de Ortega y Murillo. La mayoría de las víctimas de esta rebelión popular son gente joven asesinada por las fuerzas policiales y paramilitares.

El tercer actor es la Iglesia, particularmente la Conferencia Episcopal con el cardenal Leopoldo Brenes al frente, que ha tomado una firme y valiente posición de denuncia de la represión, saliendo en defensa del derecho de los jóvenes a rebelarse contra un gobierno dictatorial. Afirma que la Iglesia en Nicaragua es perseguida por el gobierno de Ortega-Murillo.

Y el cuarto actor: grupos armados de tendencia derechista y pro-imperialista, infiltrados entre los jóvenes. Algunos de ellos son opositores venezolanos. Otros son infiltrados de la CIA. Hay pruebas de ello. Estados Unidos siempre tiene la bota preparada para intervenir en América Latina y no perder su control. Esta confrontación hay que visualizarla dentro del marco intervencionista Washington que, aprovechando la falta de democracia del gobierno orteguista y el descontento popular, está al acecho para intervenir y someter a este país centroamericano a un plan de control de toda América Latina. Es por eso que hay que ser críticos para saber analizar lo que está aconteciendo en Nicaragua.

Lamentablemente, se ha generado una grave polarización en el pueblo nicaragüense. Un porcentaje alto apoya al gobierno, se dice que alrededor de un 30%. Y otro en contra. Hay familias divididas y esto es muy doloroso.

La única solución es el diálogo, pero el gobierno de Ortega-Murillo y, a veces también dirigentes de la oposición incluidos algunos obispos y sacerdotes, con sus actitudes confrontativas, de mutuo ataque verbal, no favorecen una salida negociada del conflicto. El pueblo sufre. Es necesario y urgente buscar métodos acertados para aliviar y detener este sufrimiento.

(Fuente: Fernando Bermúdez López)

PUERTO RICO

PUERTO RICO ENTERO ES UN MUSEO EN LLAMAS

En respuesta a una foto de las ruinas del Museo Nacional de Brasil, una amiga boricua comenta lo siguiente: «Así están todos los nuestros antes o después del huracán María. El de la Casa Armstrong está en precarias condiciones. Hasta el Museo de Albizu Campos anda en las mismas». El comentario de la amiga me lleva a la siguiente reflexión.

Comienzo diciendo que soy amante de los museos. No se conoce el alma de un pueblo, sin visitar sus museos. El vocablo es sinónimo de estudio, de inspiración, de mirada al futuro. No sé cuántas veces visité el museo de la Universidad de Puerto Rico. En el de Springfield, lugar en que vivo desde 1993, he criado a mi hijo. Digo criado, porque desde que era pequeñito llevaba a Rafael a este museo dos o tres veces al mes. Todavía insiste en que lo lleve, cada vez que se aburre. No creo que haya museo local que no hayamos visitado, los de Nueva York y Boston, incluidos. Visite usted un museo con un niño o una niña (también he ido a los de Cuba con mi hija) y descubrirá algo fascinante: los museos no nos hablan tanto del pasado como del futuro. El museo de la historia, de que nos hablaba Marx, es el receptáculo de las mil y una maneras, objetivas y subjetivas, en que las antiguas sociedades intuyeron el presente que vivimos.

Por lo anterior, y por mil razones más, tuve que reunir mucho coraje para mirar las fotos y videos del Museo Nacional de Brasil consumiéndose en llamas. Me ha dolido muy hondo. Parte del problema es que es una imagen que obliga también a pensar en Puerto Rico. Ciertamente; no es que mi isla arda literalmente bajo los efectos de un incendio voraz. Pero, y esto no es fácil de decir, es innegable que un gran ardimiento destruye actualmente la cultura puertorriqueña. Somos como un museo en llamas. La razón en nuestro caso es política: a una horda de bárbaros anexionistas, incultos y grotescos, le ha dado con poner fin a la puertorriqueñidad. Cada pueblo, cada barrio, cada esquina de la isla, incluso cada paisaje natural, se ha convertido en un museo en llamas. Si usted no lo ve hoy, quizás no lo pueda ver nunca.

Hay momentos dramáticos, como el que acabamos de ver ahora en Brasil o el saqueo del Museo de Irak en 2003, que hacen patente todo lo que se pierde al destruirse las huellas del pasado humano. Imagino que alguien con una sensibilidad igual a la de Silvio Rodríguez, llorará quizás la pérdida del Museo Nacional de Brasil con la nostalgia urgente con que este hermano escribió la canción Sinuhé. No solo lo imagino, sino que mi corazón lo desea. Con el pasado, se nos va el futuro.

El desdén neoliberal por los museos no es, como podría pensarse, solamente reflejo de la mezquindad e incultura de los burgueses de estos tiempos. El pasado, al cual dicen a veces admirar, provoca ansiedad entre las clases dominantes de este milenio. Y es que, sin retomar el pasado, no hay camino al futuro. El tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa, como genialmente argumenta Perry Anderson en su libro «Transiciones de la antigüedad al feudalismo», por ejemplo, fue un gran acto cultural de recuento de la modernidad con la antigüedad. De lo contrario, no habría ocurrido el fin de la Edad Oscura del Medioevo; del oscurantismo ese en que se sumió el continente europeo después del colapso del imperio romano. Da Vinci, por ejemplo, considerado el iniciador del renacimiento, encontró su vocación creadora y futurística retomando la gran pregunta de la matemática antigua: la cuadratura del círculo. La interrogante, que obsesionó a la ciencia y arquitectura de los siglos precedentes, fue planteada visualmente por Da Vinci en su dibujo «El Hombre de Vitrubio». En realidad, la respuesta del genio de Da Vinci no fue tanto visual como filosófica: la visión del hombre como centro del universo es un asunto que compete más al arte que a la matemática. Una pregunta bien planteada es más útil que cien soluciones imaginarias. El pasado es un punto de referencia al futuro.

Puerto Rico, mi isla, mi país, además de ser la última colonia de este hemisferio, tiene la dudosa distinción de ser un lugar en que las políticas neoliberales modernas se muestran de la forma más pura, sin adornos. Eso lo dice Naomi Klein, en su libro «La batalla por el paraíso». Aquí manda, por virtud de un acto imperial, una junta de control y saqueo fiscal, integrada por representantes directos del gran capital financiero estadounidense. No hay intermediarios, como si los hubo en Cuba, previo a la Revolución.

Tampoco operan en Puerto Rico ninguno de los mecanismos compensatorios, amortiguadores si se quiere, de los bandidajes de la banca contemporánea. No hay, por ejemplo, un mínimo sector industrial que, interesado en la producción real de plusvalía, actúe de guardián de las fuerzas productivas materiales. En vano buscar un sector precapitalista que sirva como palanca para que las masas desposeídas creen espacios alternativos de vida y sobrevivencia. No les queda sino emigrar. Nuestros políticos burgueses ni siquiera parecen burgueses de verdad. Más bien semejan personajes grotescos y burdos de las películas de Dick Tracy o Batman. Con una mano levantan la biblia pentecostal para apaciguar a las masas; con la otra, se atosigan de longanizas y burudangas hasta reventar. Feos son, por fuera y por dentro.

Y la izquierda tradicional, muy a pesar de todo su pasado glorioso, sigue dispersa en veinte esquinas; rehusándose tercamente a transitar por los caminos de la unidad, convencida quizás de que un milagro habrá de salvar al país del caos general. De no ser por la juventud boricua valerosa, que ha decidido tomar en sus manos el futuro, hace rato que el fuego neoliberal habría acabado con todo en este museo que hoy es, simbólicamente, mi Puerto Rico.

(Fuente: Rafael Rodríguez Cruz. Rebelión)

VENEZUELA

LOS “PECADOS” DE VENEZUELA. (En clave cristiana)

A estas alturas de la historia nadie puede dudar de que, Jesús de Nazaret, no entregó su vida para redimir al mundo de sus pecados. Predestinado, además, por un Padre sanguinario que habita en el “cielo”. Al Nazareno lo torturaron y lo crucificaron por defender la fraternidad, la igualdad y la libertad. Por defender la hermandad entre todos los seres humanos. Por defender la Justicia y por decir que “es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, que un rico en el Reino de los cielos”. Y también por enfrentarse a los poderosos y a los sumos sacerdotes de la época, a los que llamó raza de víboras. Esos mismos sepulcros blanqueados, que representan ciertas jerarquías eclesiásticas actuales, que se enfrentan a un Papa decente con el evangelio de Jesús y se rajaron las vestiduras contra Chávez, y ahora con Maduro, precisamente por pretender implantar un sistema parecido al Proyecto de Jesús y, sin embargo, no tienen el menor pudor en aliarse con ese capitalismo salvaje que tanto daño está ocasionando al planeta y a su gente.

Desde que Chávez asumió la presidencia de Venezuela y osó cometer el gravísimo pecado de enfrentarse a la crueldad neoliberal, ofreciendo un programa basado en la fraternidad, la igualdad y la libertad, el digno pueblo venezolano no ha disfrutado de un minuto de respiro, para poder continuar profundizando en su fraterna alternativa de paz y amor. El codicioso capitalismo, convertido en pastor del oscuro rebaño, que representan los países alineados con esta plaga neoliberal, a la que se han sumado esos dirigentes latinoamericanos, traidores a sus pueblos y a la patria grande latinoamericana y, por supuesto, esa maquiavélica oligarquía venezolana, que se cree dueña de este bendito país caribeño y amo de su gente, no podía permitir que Venezuela se convirtiera en esa ovejita “negra”, que disintiera de esa antihumana forma de actuar.

Los descendientes de Bolívar, cometieron el grave pecado de emplear las grandes ganancias que proporcionan sus esenciales recursos naturales, y que anteriormente se las apoderaban las grandes empresas estadounidenses y las acaudaladas familias del lugar, en el empobrecido pueblo venezolano, en forma de admirables y humanitarios programas sociales, educativos, de salud y alimentación. Tal como perseguía el Nazareno. ¿De qué se queja entonces la jerarquía eclesiástica venezolana?, ¿si antes sólo había hambre, opresión y muerte (Caracazo)? Y si ahora existe la muerte es debida a los continuos ataques del despiadado capitalismo.

Pero, Chávez, Maduro y la Revolución bolivariana, continuaron cometiendo pecados imperdonables para la “democracia neoliberal”. Decidieron tomarse en serio la soberanía popular, que pregona su novedosa e insolente Constitución, instituyendo los Consejos Comunales y las Comunas, otorgándoles protagonismo político y dotándoles de significativas partidas presupuestarias. Tal afrenta, los dejaba con el culo al aire en su tan cacareada oferta democrática, que sólo se limita a unas votaciones cada cuatro años y, encima, haciendo trampas cuando les conviene. Todo lo contrario que el chavismo, puesto como sistema electoral ejemplar por la prestigiosa oficina Carter y numerosos analistas y observadores internacionales.

Continuaron cometiendo pecados contra la sagrada economía capitalista. Las relaciones con otros países latinoamericanos no se basan en la usurera ganancia que practica aquella, sino en la solidaridad entre los pueblos. De forma que ayuda a los países más empobrecidos, suministrándole petróleo barato a cambio de otros productos de necesidad para Venezuela. Ejercita el beneficioso trueque con Cuba, de petróleo por servicios médicos o deportivos para su población...Y así, otros acuerdos comerciales, fundamentados en la cooperación y nunca en la competitividad o en la obtención del lucro. La oposición también criticó mucho esta forma de relación comercial, aduciendo que “se estaba regalando el petróleo”. En este momento sí, pero antes que se lo llevaban “calentito” para ellos y sus codiciosos socios empresariales del exterior, no suponía un regalo. Para la economía capitalista, las ganancias desorbitadas para sus élites nunca suponen un pecado, claro.

Para conformar una Latinoamérica grande y soberana, a la que tienen tanto derecho como cualquier otro país o región, Hugo Chávez, propició la creación de diversas instituciones supranacionales, como UNASUR, TPC o el ALBA, entre otras. Esta última supuso una culpa crecida, puesto que contrarrestaba al ALCA, un acuerdo comercial estadounidense, previsto con los países latinoamericanos y que el presidente venezolano frenó, deteniendo los succulentos réditos, así como el control económico y político, que suponía para el imperio estadounidense.

El Neoliberalismo ha propiciado, en su afán de enriquecimiento, guerras de sometimiento y robo de los recursos de los pueblos, cientos de millones de personas emigren o se refugien para poder encontrar o salvar sus vidas. El chavismo ha cometido el gran pecado de acoger en sus tierras a millones de refugiados, acogiéndoles como verdaderos hermanos.

Otra mácula importante para sus declarados enemigos, representó las reiterativas posturas de paz y diálogo con la violenta oposición. Cada vez que el chavismo saldaba una embestida de la “pacífica” oposición, que siempre se ha librado con numerosas personas asesinadas, torturadas e incluso quemadas, además de cuantiosos daños urbanos, siempre el gobierno llamaba al diálogo, creando la oportuna mesa de negociaciones, en lugar de la venganza, como suele hacerlo el Neoliberalismo. Tampoco se entiende esa postura de la jerarquía eclesiástica apostando por la violencia opositora, incluso bendecida a veces, en lugar de significar la voluntad de paz y diálogo que siempre demostraron Chávez y Maduro. No se entiende como para Estados Unidos, la violencia, las guerras y los bombardeos contra civiles no son pecados, en cambio la demostrada vocación hacia la paz y la concordia de Venezuela, si lo es. Estados Unidos, tiene regada más de 800 bases militares, único país que ha lanzado una bomba atómica sobre la población civil e invadido muchísimos países. Venezuela, que nunca ha invadido país alguno, ha cometido el grave pecado de no permitir que el sañoso tío Sam, la instale en el suyo.

La penitencia impuesta por estos “pecados”, a lo largo de 19 años, ha sido brutal y nada cristiana. El dios que bendice contantemente a Estados Unidos por boca de sus presidentes y que, a diario, también se convoca en las múltiples iglesias venezolanas, por boca de sus prelados, nunca puede alabar cualquier presión económica que estrangule a un pueblo, o incida financieramente para que ese pueblo se vaya empobreciendo por las continuas devaluaciones de su moneda, o por retener alimentos o medicinas, ya pagadas, para acosar a ese castigado pueblo. Y mucho menos, permitir que los verdaderos y reales pecados del imperio capitalista, se les achaque a las bondades bolivarianas.

Finalmente, acaba de cometer el pecado mortal de reinventar el Petro, una criptomoneda anclada al sólido barril de petróleo y no asegurado a una caprichosa maquinita de fabricar billetes, como es el dólar. Moneda, que era manejada desde el exterior para provocar las múltiples devaluaciones del bolívar, y que tanto desajuste económico ha ocasionado al país.

La excusa por la que se pretende justificar una injustificable intervención militarista, que puede ocasionar miles de muertes, eso sí, bendecida por la jerarquía eclesiástica

venezolana cual cualquier guerra santa del medievo, o cruzada franquista española, es motivada para “atender” una emergencia humanitaria. ¡Hay que joderse! ¡Como si no hubiese mayores emergencias humanitarias en Colombia, México u Honduras, por ejemplo! Y segundo, ¿Quiénes son los verdaderos culpables de que falten medicinas y alimentos en Venezuela? Pues aquellos quienes la denuncian y solicitan la intervención.

El Dios de Jesús de Nazaret, ese Padre-Madre bueno, que sabe distinguir el bien del mal, la solidaridad de la avaricia, la paz de la violencia, la verdad de la mentira, nunca aceptaría las maldades prodigadas por este salvaje capitalismo, capaz de apagar cualquier semilla que haga brotar la fértil hermandad mundial, cuando está basada en la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad. Como tampoco bendeciría a todas esas jerarquías eclesiásticas que, precisamente, lo utilizan para alinear sus conciencias en contra de la voluntad del Creador.

(Fuente: Comité Oscar Romero de Cádiz)

VENEZUELA: PROTESTAS DE UN SIGNO DIFERENTE.

Con las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo se ponía fin a un frenético ciclo electoral que incluyó tres comicios –municipales, regionales y los ya citados presidenciales- en apenas ocho meses. Tras las tres convocatorias, el chavismo quedaba con una de las mayores acumulaciones de poder institucional que ha tenido en su historia: 306 de las 335 alcaldías, incluidas las principales ciudades; 19 de los 23 estados y la Presidencia de la República, además de la Asamblea Nacional Constituyente, ocupada en su totalidad por diputados chavistas ante el boicot de la oposición.

También se optó por el boicot en las elecciones de mayo, una decisión que se demostró totalmente fallida toda vez que la derecha no logró instalar su argumento de que los comicios eran ilegítimos dado el alto índice de abstención (54%). La percepción del electorado –hubiera votado o no- fue que con independencia del nivel de participación, lo cierto era que el vencedor había sido Nicolás Maduro y que ocuparía el Palacio de Miraflores durante seis años más.

La oposición quedaba de nuevo desnortada. Henri Falcón, la opción para relevar a la derecha tradicional, no consiguió su objetivo. Con menos de dos millones de votos no podía erigirse en el nuevo oponente de Maduro. El desconocimiento de los resultados, la misma noche de las elecciones, dejó traslucir su frustración por el magro resultado. Queda la duda de si habría aceptado el escrutinio si hubiera obtenido mejores guarismos. En cualquier caso, es difícil que el resto de dirigentes de la derecha y su base votante le perdonen haber roto el boicot.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una frágil alianza cohesionada tan sólo por el objetivo de desalojar al chavismo, implosionó. El abandono de Acción Democrática –el gran partido que ha conformado el sentido común venezolano en los últimos sesenta años y que aún mantiene una vasta capilaridad sobre todo el territorio- la dejó herida de muerte y, aunque formalmente sigue existiendo, su operatividad política desde las elecciones hasta ahora es mínima. Nuevas plataformas como el denominado Frente Amplio –en el que también está integrado la MUD- se han visto incapaces de dinamizar a la oposición política y social.

Nuevos tipos de protestas

La ausencia de una oposición política cohesionada y operativa, unida al cese de la lógica electoral, ha dado pie al surgimiento de unas protestas que, en principio, parecieran muy poco relacionadas con las violentas guarimbas que sacudieron al país en 2014 y 2017. Da la impresión de que al finalizar las campañas, con su avalancha de mensajes y el protagonismo absoluto y excluyente de los candidatos, se ha abierto un espacio en el que puede emerger otro tipo de acciones, esta vez ya sin tutelas partidistas. En efecto, desde hace unos meses se sucede una miríada de protestas

sectoriales, muy pequeñas aún en número pero constantes. Son protestas focalizadas en los problemas que asedian a los trabajadores y al ciudadano de a pie: la hiperinflación, el desplome del poder adquisitivo, la degradación de los servicios básicos (salud, educación, agua, electricidad y transporte, principalmente), la escasez de efectivo que dificulta cualquier transacción en la vida cotidiana...

Estos focos de protesta están protagonizados por los trabajadores de diferentes sectores y/o por los usuarios de los servicios. El *modus operandi* es similar: los trabajadores se congregan a las puertas de su trabajo para denunciar públicamente la precarización de su actividad. En el caso de los usuarios, suelen cortar calles o bien reunirse frente a la institución a la que consideran responsable de la precarización del servicio. Desde que empezara esta modalidad de protesta se han registrado concentraciones de trabajadores de la salud, del transporte, de las compañías públicas de electricidad y de telecomunicaciones, de los jubilados y pensionistas, de profesores de educación primaria y secundaria, de pacientes y enfermos, de vecinos ante la falta de agua... El partido de oposición Voluntad Popular contabiliza cerca de 600 protestas, si bien esta cifra hay que tomarla con precaución por tratarse de una fuente interesada y parcial.

En un principio, estas acciones eran aisladas y apenas tenían reflejo más allá de algún comentario de las redes sociales. Sin embargo, la protesta de los trabajadores de la salud logró poner el problema sanitario en primer plano. Durante varias semanas, el personal mantuvo concentraciones diarias a la puerta de los hospitales y ambulatorios públicos, protestando tanto por su insuficiente salario como por el deterioro del servicio que se ofrece a los pacientes. Además, el foco de la protesta recayó en los empleados de escala media y baja (enfermeros y personal de asistencia), no sobre médicos y doctores, lo que confería una mayor imagen de vulnerabilidad y legitimidad.

La comparativa entre el salario de un médico y el de un militar, con el reciente aumento para las Fuerzas Armadas decretado por el Gobierno -240 millones de bolívares mensuales para un coronel por 3 millones para un doctor de la salud pública con 25 años de experiencia- contribuyó a propagar la protesta en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pronto, asociaciones de pacientes y ciudadanos a título particular se unieron a las concentraciones.

Otra de las protestas que tiene un eco relativamente amplio es la de los pensionistas y jubilados, quienes periódicamente se reúnen frente a ministerios e instituciones para protestar por la insuficiencia de una pensión cuyo poder adquisitivo es devorado en cuestión de días por la hiperinflación.

¿Quién puede capitalizar el descontento?

El fenómeno de las protestas sectorializadas, basadas en la denuncia focalizada y en la exigencia de soluciones concretas, se aleja por completo del modelo de la guarimba, con su interpelación a la totalidad y su pretensión de derrocamiento del Gobierno y aniquilación del chavismo. Obviamente, también están en polos opuestos en cuanto a las formas. Mientras que la violencia y la interrupción de la vida cotidiana marcaron las estrategias de 2014 y 2017, estas concentraciones apuestan por la vía pacífica, concitando la solidaridad y el apoyo social (en 2017, más del 80% de los venezolanos rechazaba las guarimbas, frente a la comprensión del fenómeno de las protestas sectoriales –a falta de una encuesta que lo ratifique- que parece unánime).

Pero lo más importante es resolver unos interrogantes que por el momento no tienen respuestas. ¿Estas protestas son genuinamente neutras y no obedecen a ningún partido político sino al hartazgo ciudadano ante la crisis? Y si es así, ¿puede alguno de los dos polos en disputa capitalizar este movimiento?

Es difícil responder a la primera pregunta, pero todo apunta a que, en efecto, no hay una dirección política oculta tras estas protestas. En estas concentraciones hay una mezcla tanto ideológica –en ellas participan votantes chavistas así como trabajadores del sector público que muestran su lealtad al Gobierno pero quieren mejoras y soluciones (es sintomático el paro de los trabajadores del programa de salud Barrio

Adentro, una de las iniciativas emblemáticas del chavismo en materia de atención social).

Asimismo, también parece evidente la simpatía que despiertan en el ciudadano de a pie. En su narrativa convergen muchos elementos positivos: lo justo de sus reivindicaciones; la vulnerabilidad y sensibilidad del servicio que representan; la toma de una postura activa en un momento en el que los actores políticos parecen paralizados, desde un Gobierno que no demuestra capacidad para dar soluciones a los problemas reales a una oposición completamente desubicada; la sensación de que no sólo defienden sus intereses sino también los del ciudadano; la alianza interclasista entre profesionales, clases medias-bajas y clases populares...

La siguiente pregunta se centra en torno a la posibilidad de que alguna fuerza política capitalice este descontento y consiga organizarlo en un estadio superior que vaya más allá de la protesta formal.

La oposición tradicional no está en condiciones de liderar estas protestas. El desprestigio de sus líderes es de tal magnitud que ningún gremio quiere que se le asocie a ellos. Los tímidos intentos de acercamiento –por ejemplo, María Corina Machado acudiendo a las concentraciones del personal sanitario- fueron rechazados sin miramientos. Por el momento, la derecha se limita a difundir las protestas en sus redes sociales y mostrar su apoyo testimonial. Da la impresión de que los protagonistas de las protestas son conscientes de que perderían legitimidad en el caso de ser cooptados políticamente.

Ante la ausencia de una oposición legitimada que capitalice estas nuevas formas de expresión del descontento, el chavismo tiene ante sí la oportunidad de ocupar este territorio. Pero para ello no vale sólo que muestre comprensión ante el descontento. Debe ofrecer soluciones concretas. La crisis dura ya cinco años y el sufrimiento social es profundo. Los focus group realizados por Celag en este tiempo muestran que el principal reproche hacia el Gobierno de Nicolás Maduro es una supuesta inacción e incapacidad para resolver los problemas. En este sentido, está por ver el resultado del Congreso Nacional Revolucionario de la Salud que ha convocado el presidente para los días 25 y 26 de agosto.

Por otra parte, no es descabellado aventurar que un crecimiento y una mayor organización de las protestas puede generar un movimiento novedoso que ponga en jaque el escenario polarizador chavismo-oposición que ha prevalecido en estos veinte años. Si esto ocurriera, sería el caldo de cultivo adecuado para el surgimiento de una tercera vía con nuevos liderazgos.

El chavismo campesino da un paso al frente

En este contexto irrumpió una protesta atípica por cuanto surge del considerado chavismo más auténtico, el de los trabajadores del campo. La Marcha Campesina Admirable recorrió más de 400 kilómetros a pie para trasladarle a Nicolás Maduro los graves problemas que viene padeciendo la población del mundo rural. Los problemas de salud, agua, luz e hiperinflación se multiplican en el interior con respecto a las grandes ciudades. Pero, además, se suma una creciente violencia latifundista que está desalojando con sicariato –y muchas veces con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado- a los pequeños productores de las tierras inactivas que han ido ocupando estos años. El goteo de líderes campesinos e indígenas asesinados en estos últimos tiempos ha sido constante.

La diferencia de esta protesta con las reseñadas anteriormente es que sus protagonistas manifestaron desde el primer momento su inquebrantable apoyo al presidente Maduro, al chavismo y a la Revolución. La narrativa de la Marcha Campesina Admirable, preñada de valores positivos (la puesta en acción del humilde ante la injusticia; la revalorización del trabajo campesino ante la escasez de alimentos; la épica de una marcha de más de 400 kilómetros emulando la Campaña Admirable de Simón Bolívar; la lealtad revolucionaria) originaron que esta iniciativa estimulara a las organizaciones populares y movimientos sociales chavistas, que durante estos años

han sido más reactivos que proactivos. La dirigencia chavista, por su parte, demostró reflejos, recibiendo a los campesinos al más alto nivel, desde Diosdado Cabello a Nicolás Maduro, y con reuniones que fueron retransmitidas en directo por la televisión pública.

Al igual que con las protestas no partidarias, con esta Marcha Campesina netamente chavista cabe hacerse varias preguntas. La primera es hasta qué punto puede suponer un revulsivo en la postura reactiva y defensiva que el chavismo, tanto a nivel institucional como de organización de base, parece haber caído a causa de la crisis. La ola de entusiasmo que ha originado en las filas chavistas, ¿puede dar lugar a algún tipo de movimiento que ofrezca algo más que resistir ante los embates de la crisis?

Por otra parte, no hay que olvidar que el chavismo es una identidad política tremendamente heterogénea, con diferentes sensibilidades que confluyen en torno a un proyecto común. Esta heterogeneidad también está reflejada en el Gobierno y en las esferas de decisión. Aquí cabe preguntarse qué corrientes saldrían reforzadas ante un hipotético auge de la movilización chavista de base y cuáles perderían parte de su influencia. En cualquier caso, todo son elucubraciones puesto que está por verse si el ejemplo de la Marcha Campesina prende en otros sectores.

En este sentido, y como máxima autoridad no sólo del Estado sino también del chavismo, también es pertinente elucubrar sobre cómo Nicolás Maduro puede capitalizar esta iniciativa y otras similares. La percepción de su perfil y su trayectoria – cercano al pueblo, honesto, autenticidad, sensibilidad con el pueblo- corroboradas por los focus group lo colocan como el actor idóneo para realizar una alianza con este tipo de movimientos (mucho más, por ejemplo, que Diosdado Cabello o representantes de la corriente militar).

Un salto cualitativo en la violencia de la derecha

Esta incipiente dinámica se vio abruptamente interrumpida por el intento de asesinato de Nicolás Maduro que tuvo lugar el sábado, 4 de agosto, durante la celebración de un desfile militar. Aunque los detalles siguen siendo confusos, parece ser que una célula organizada intentó matar al presidente con dos drones cargados de explosivos. El atentado no logró su objetivo. Siete personas resultaron heridas de diversa consideración. Ya hay varios detenidos, entre ellos el dirigente opositor de Voluntad Popular, Juan Requesens.

Más allá de las teorías sobre la autoría del atentado –algo que como suele ocurrir en Venezuela quedará envuelto en las brumas del rumor y de la conspiración-, lo que compete a este informe es evaluar las consecuencias de este suceso.

En primer lugar, cabe señalar que el atentado constituye una escalada en los intentos de magnicidio del presidente. Hasta el momento, se habían desarticulado células y complotos destinados a acabar con la vida de Maduro. Pero esta es la primera ocasión en la que se llega tan cerca de su persona y se da la sensación –transmitida, además, por televisión- de que efectivamente se podía haber logrado su eliminación. ¿Optarán los sectores más radicales por continuar con este tipo de acciones?

En segundo lugar –y a falta de corroborar este hipótesis con estudios de opinión- da la sensación de que el atentado ha sido aplaudido tan sólo por las corrientes más radicalizadas, tanto las internas como las externas. En el inconsciente del venezolano promedio ha quedado la violencia extrema de las guarimbas de 2014 y 2017, con su reguero de asesinados, heridos, destrozos y paralización de la vida cotidiana. Nadie quiere volver a ese escenario. Hay una suerte de acuerdo tácito de que los problemas de Venezuela se tienen que resolver por vías pacíficas. Por otra parte, los sectores más clarividentes de la oposición entienden que la desaparición de Maduro no significaría la desaparición del chavismo ni el derrocamiento del Gobierno. Más bien todo lo contrario: el chavismo cerraría filas y consolidaría su posición de poder.

De hecho, y este sería el tercer punto, el atentado disparó de forma automática la reacción de las bases chavistas, que al día siguiente se congregaron frente al Palacio de Miraflores para mostrar su apoyo al presidente. Como se ha mencionado en

informes y artículos anteriores, el chavismo se mueve extraordinariamente bien en la confrontación pero tiene más dificultades en coyunturas de normalidad donde lo que impera es la gestión eficiente de la cotidianidad. A pesar de los años transcurridos, esto no parece haber sido entendido por muchas facciones de la derecha, que siguen una estrategia de polarización que en último término refuerza al chavismo.

El atentado ha opacado los ecos de las protestas sectoriales y campesina. Pero cuando se diluya el efecto mediático, los problemas urgentes seguirán ahí. Hacer predicciones en Venezuela es un ejercicio de alto riesgo y los supuestos periodos de calma nunca son tales.

(Fuente: Alejandro Fierro. CELAG)